

**“LA UNIÓN MARITAL DE HECHO COMO ACTO CONSTITUTIVO  
DE UN SEUDO ESTADO CIVIL”**

**MAXIMINO ALEXANDER RUIZ GÓMEZ**  
**MONOGRAFÍA PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ABOGADO**

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**  
**FACULTAD DE DERECHO**  
**BOGOTÁ D. C.**

2.011

**“LA UNIÓN MARITAL DE HECHO COMO ACTO CONSTITUTIVO  
DE UN SEUDO ESTADO CIVIL”**

**PRESENTADO A:  
DR. BERNARDO VANEGAS MONTOYA**

**PRESENTADO POR:  
MAXIMINO ALEXANDER RUIZ GÓMEZ**

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
FACULTAD DE DERECHO  
BOGOTÁ D. C.**

2.011

**ACEPTACIÓN:**

---

**TUTOR**

---

**JURADO**

---

**JURADO**

---

**JURADO**



## **DEDICATORIA:**

A mis padres, inspiradores y creyentes en tan magna institución que ampara nuestra carta política, fuente de derechos y deberes en nuestra sociedad, cuna de valores y enseñanzas, escuela de virtudes y templo de semblanza.

## **AGRADECIMIENTOS**

Al todopoderoso, que ha iluminado mi camino y en virtud de su generosidad, me ha permitido elaborar esta monografía para optar por mi título de abogado.

A la Universidad Militar Nueva Granada y sus docentes, por acompañarme en el camino del saber y guiar mis pasos hacia la construcción de un mejor país.

A mis padres, hermanas y novia, por su incesante paciencia, amor, apoyo, confianza y ante todo por ser la fuente de inspiración de tan magno trabajo.

A todos aquellos y aquellas que de manera directa e indirecta me generaron tantas expectativas y aquellas inquietudes.

## **MONOGRAFÍA PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ABOGADO**

Ante el vacío legal de la Ley 54 de 1990, es importante que se presente una reglamentación donde se regule a los compañeros permanentes, los derechos emanados de los principios constitucionales otorgados por la Carta Política de 1.991, y que se determinen en ella todos los aspectos dejados de lado referentes a la Unión Marital de Hecho, que generan en la actualidad un trato aparentemente discriminatorio con respecto al matrimonio; aspectos éstos, que la Jurisprudencia ha tratado de suplir, como es el reconocimiento del estado civil de compañero permanente que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil aprobó a través del auto 205 del 18 de junio de 2002, donde se afirma que la Unión Marital de Hecho tiene la virtud de establecer o modificar el estado civil de quienes hacen parte de ella, es decir que la Unión Marital de Hecho, al igual que el matrimonio genera una especie de estado civil. Corresponde entonces al legislador la tarea de suplir tal vacío y poner en un plano de igualdad la institución en análisis o en su defecto reconocer que estamos frente a un pseudo estado civil.

## **INTRODUCCIÓN**

Con el transcurrir del tiempo nuestro sistema jurídico a la sombra de los cambios políticos, sociales y jurídicos que se han presentado, ha tratado de equiparar el trato legal que se le da a la familia, tanto a las conformadas por vínculos naturales o de hecho, como a las que se conforman por medio del vínculo matrimonial, mediante la concesión de algunos derechos a los compañeros permanentes, génesis de ello, la expedición de la Ley 54 de 1990 que les dio especial protección reglamentando el régimen patrimonial para los mismos.

Aunque la expedición de esta norma es de vital importancia, su reglamentación no ha sido suficiente, prueba de ello, subsisten vacíos jurídicos muy significativos en su articulado. Frente a esta realidad le ha correspondido al intérprete constitucional solucionar por vía Jurisprudencial los conflictos que se presentan.

La Ley 54 de 1990, es el eje fundamental de estudio, pues si el intento de legislador era dar un tratamiento de igualdad a los compañeros permanentes que por su voluntad responsable deciden conformar familia; ésta dejó ciertos aspectos por fuera de su reglamentación, como lo atinente a los alimentos, pensión, registro de la unión marital de hecho, y en especial lo referente a la constitución de un posible estado civil de las personas que deciden formar este tipo de unión.



De modo que, en esta monografía realizaré un corto estudio histórico de los avances conseguidos por los compañeros permanentes, analizaré los principios constitucionales que protegen la conformación de la familia ya sea que ésta se conforme por vínculos naturales o legales, y el porqué en la legislación colombiana no existe una Ley expresa que le otorgue a los compañeros permanentes el respectivo estado civil; con el fin de cuestionar la pertinencia que tendría una regulación completa para los compañeros permanentes, que les proporcione una seguridad jurídica y que no deje la concesión de ciertos derechos al arbitrio del intérprete.

La nota común que resulta de la propia noción de esta institución es la exclusión, por regla general, de las normas legales del matrimonio, ya que los interesados voluntariamente no se acogen, sea por razones de formalismos, sea por razones de conveniencia o por otras. No obstante, esta exclusión no significa, como ocurre con todo fenómeno social, que el Derecho permanezca al margen de los derechos y deberes que surjan bajo estas situaciones entre la pareja e incluso con terceros.

Encontraremos que se identifican dos posturas que los ordenamientos jurídicos contemporáneos adoptan ante las uniones maritales de hecho. Una, la de aquellos que de modo directo y específico regulan los efectos jurídicos de tales uniones maritales de hecho, y otra, la que, sin regular de manera concreta tal situación fáctica ni equipararla al matrimonio, no desconoce sus efectos atribuyéndole, bien de forma fragmentaria y dispersa en preceptos aislados, bien analógicamente por vía Jurisprudencial, determinadas consecuencias jurídicas, ámbito en el que puede incluirse nuestro ordenamiento jurídico.

En esta monografía, como ya se dijo, estudiaré la Unión Marital de Hecho en el Derecho Colombiano, su regulación, efectos y desarrollo Jurisprudencial; bajo la perspectiva de un pseudo estado civil de las personas que optan por esta forma de constituir familia.

## TABLA DE CONTENIDO

1.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
2.	HIPÓTESIS	5
3.	MARCO TEÓRICO	6
4.	MARCO CONCEPTUAL	11
5.	MARCO JURIDICO	16
6.	JUSTIFICACIÓN	20
7.	OBJETIVOS	26
	OBJETIVO GENERAL	26
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	26
	CAPITULO 1.	27
	DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	
1. 1.	Generalidades	27
1. 2.	Necesidad de hablar de un pseudo estado civil en Colombia	28
	CAPÍTULO 2.	30
	DEL CONCUBINATO A LA “UNIÓN MARITAL DE HECHO”	
2. 1.	Concubinato en el Derecho Colombiano	32
	CAPÍTULO 3.	35
	REGLAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA UNIÓN MARITAL.	
3. 1.	Unión Marital y la Constitución Política de Colombia.	35
3. 2.	“Unión Marital De Hecho” y la Ley 54 de 1990”	38
3. 2. 1.	Noción de “Unión Marital de Hecho”	38
3. 2. 2.	Requisitos de La “Unión Marital de Hecho”.	40

3. 2. 3.	Prueba de La “Unión Marital de Hecho”	41
3. 2. 4.	Naturaleza Jurídica de La “Unión Marital de Hecho”.	44
3. 2. 5.	Elementos de la Unión Marital.	44
3. 2. 6.	Efectos Jurídicos	45
3. 2. 6. 1.	Efectos de orden personal	45
3. 2. 6. 2.	Efectos Patrimoniales	47
3. 3.	Unión Marital y vacíos de la Ley 54 de 1990.	56
3. 3. 1.	Registro de La Unión Marital	57
3. 3. 2.	Deberes entre los compañeros permanentes	58
3. 3. 3.	Causales de separación	58
3. 3. 4.	Uniones Maritales con personas incapaces	59
3. 3. 5.	Competencia Territorial	60
	CAPÍTULO 4.	61
	UNIÓN MARITAL 59PRECISIÓN TEMÁTICA Y CONCEPTUAL	
4. 1.	Antecedentes de La Unión Marital.	61
4. 1. 1.	Antecedentes Sociales	61
4. 1. 2.	Antecedentes Legales	63
4. 1. 3.	Antecedentes Jurisprudenciales y Doctrinales	67
4. 2.	Delimitación Del Concepto y Requisitos de La Unión Marital de Hecho	70
4. 2. 1.	Definición.	70
4. 2. 2.	Precisión temática y conceptual	70
4. 3.	Alcance de los Requisitos de La Unión Marital	75
4. 3. 1.	Heterosexualidad o Diversidad de sexos.	77

4. 3. 2.	Singularidad de los Extremos.	78
4. 3. 3.	Los compañeros permanentes no pueden estar casados.	80
4. 3. 4.	Comunidad de vida.	81
4. 3. 5.	Permanencia de vida.	83
4. 4.	Doctrina y Jurisprudencia.	85
4. 4. 1.	La “Unión Marital de Hecho” no crea un estado civil.	85
4. 4. 2.	La “Unión Marital De Hecho” es una especie de estado civil.	87
4. 5. 3.	Unión de hecho como forma de familia.	91
4. 5. 4.	Unión de hecho.	92
4. 5. 5.	Unión Marital entre homosexuales.	95
4. 5. 6.	Ley 54 de 1990.	98
4. 5. 7.	Concubinos.	99
4. 5. 8.	Evolución legislativa de las uniones de hecho.	99
4. 5. 9.	El concepto de familia frente a las uniones homosexuales.	100
	CAPÍTULO 5.	103
	LA UNIÓN MARITAL COMO SEUDO ESTADO CIVIL.	
5. 1.	Estado Civil	103
5. 1. 1.	Concepto del estado civil en las personas naturales.	103
5. 1. 1. 1.	Concepto amplísimo del estado civil	104
5. 1. 1. 2.	Concepto amplio del estado civil	105
5. 1. 1. 3.	Conceptos restringidos de estado civil	105
5. 1. 2.	Antecedentes Históricos.	106
5. 1. 3.	Características del estado civil.	107
5. 1. 4.	Intervención de la voluntad en la constitución del estado civil.	110
5. 2.	Seudo Estado Civil – La Confusión en su propósito.	111

CONCLUSIONES	115
BIBLIOGRAFIA	120

## 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia, la legislación referente al estado civil de las personas fue definida frente a una realidad social que como todo lo referente al ser humano y a su manera de relacionarse con el resto de la sociedad, ha ido cambiando con el paso del tiempo; de una época dónde se era casado o soltero, a la nuestra donde esta “clasificación” ya no basta, por cuanto existen ahora un sin número de parejas que conviven juntos pero que no están casados.

Desde la vigencia de la Ley 54 de 1990, la Unión Marital de Hecho, ha sido entendida como la *“formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una vida permanente y singular”*, no originaba un estado civil, porque conforme lo preveía el artículo 42 de la Constitución Política, el legislador era el único facultado para determinar lo *“relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”*, situación que no podía deducirse de la precitada Ley, pues ella no tuvo por tarea crear un estado civil.

Teniendo en cuenta la realidad y el contexto social actual en el que se desenvuelve la sociedad colombiana, se generó una rectificación de la Doctrina respecto del tema en cuestión, porque aún sin que se haya expedido la Ley que haga la asignación del estado civil de compañero permanente, normativamente se han introducido cambios que tienden a darle a la Unión Marital de Hecho un tratamiento jurídico equiparable o semejante al del matrimonio.

Por esto, no es único propósito de la mencionada Ley, definir la Unión Marital de Hecho y describir sus elementos, sino que también en ella se estableció que esa conceptualización se hacía para todos los efectos civiles<sup>1</sup>, lo que significa que, con independencia de cuáles sean en concreto esos efectos, es innegable que la norma hace alusión a una relación jurídica específica que genera consecuencias jurídicas determinables para cada uno de los compañeros permanentes”<sup>2</sup>.

La mencionada norma debe entenderse con una vocación de equidad e igualdad, porque sin duda alguna lo que sus normas procuran es reconocer, que la unión de libre entre dos personas, también corresponde a una de las formas legítimas de constituir una familia, merecedora, por lo tanto, de protección legal y de aceptación social.

Si la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, bien por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio, o por la voluntad responsable de conformarla, es claro que en un plano de igualdad, ambos casos deben recibir el mismo trato.

Así pues, es posible afirmar que la “Unión Marital de Hecho, al igual que el matrimonio, es una especie mas no un estado civil, no es algo que sea externo a las personas que la conforman, por el contrario, trasciende a ellas, es decir, a la pareja misma y a cada uno de sus miembros individualmente considerados, con

---

1 Ley 54 de 1990 (diciembre 28 de 1990), por la cual se definen las Uniones Maritales de Hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes. Diario Oficial No. 39615, del 31 de diciembre de 1990.

2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Auto 205 de 2008. 18 de Junio de 2008.



cierto status jurídico en la familia y la sociedad”<sup>3</sup>. Sin embargo, este status jurídico debe ser reconocido en legal forma por el legislador y aun no ha habido pronunciamiento por parte de este sobre el tema planteado.

Frente a la figura de la Unión Marital de Hecho, nuestras altas Cortes han tenido abundantes pronunciamientos; algunos protegiendo a la familia que de ella surge, sin que pueda recaerle ningún tipo de discriminación; otros protegiendo a los compañeros permanentes cuando están en peligro de ser discriminados por su calidad de compañeros permanentes, unos cuantos reconociendo una igualdad jurídica a los compañeros permanentes y a los cónyuges, y otros más, reconociendo derechos a los compañeros permanentes, pero siempre respetando la esencia que hace diferente a la Unión Marital de hecho de la institución matrimonial.

Con base en lo anterior, podemos determinar que de la Unión Marital de Hecho surgen ciertos derechos y obligaciones para los compañeros permanentes similares a las de los cónyuges pero no iguales; estos derechos y obligaciones tienen fundamento legal y constitucional.

Esta pretensión se presenta como un seudo estado civil, que no es otro que el acuerdo de voluntades de los compañeros permanentes manifestado en su intención de convivencia sin que ello genere consecuencia alguna adicional a las atinentes al aspecto meramente patrimonial.

---

3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Auto 205 de 18 de junio de 2008.

Es evidente que aun cuando la Ley en mención trato de regular lo referente a las Uniones Maritales, dejó serios vacios que deben ser llenados por el legislador para evitar la vulneración de los derechos de este tipo de uniones.

En éste orden de ideas puedo plantear la siguiente pregunta:

¿En Colombia cuáles son las razones históricas, Jurisprudenciales y legales que sustentan el trato diferencial existente en cuestión de estado civil y seguridad jurídica entre los cónyuges y los compañeros permanentes y cuál ha sido el papel de la Jurisprudencia en este ámbito?

## **2. HIPÓTESIS.**

Ante el vacío legal planteado, es imperativa la regulación como es debido, teniendo en cuenta lo ya reconocido por la Jurisprudencia colombiana referente a la Unión Marital de Hecho como acto constitutivo de un pseudo estado civil, en aras de proteger el derecho de igualdad y seguridad jurídica, de aquellas parejas que han constituido este tipo de vínculo.

Es así como puedo proyectar:

El constituyente en la Ley 54 de 1990 no designa expresamente a la Unión Marital como un estado civil, hace extensivos todos los efectos civiles que esta produzca, mas no genera ni mucho menos cumple con los requisitos para establecer el mismo, estando así bajo la apariencia de un pseudo estado civil.

### 3. MARCO TEÓRICO.

Como es bien sabido, la evolución familiar no ha tenido ni una conformación, ni un desarrollo uniforme, las diferentes culturas, costumbres y etnias le dan un tratamiento disímil, como lo señala J. D'Aguanno en su obra "Génesis y Evolución Del Derecho Civil"<sup>4</sup>.

Hay un punto fundamental, y es que conforme lo señala el autor arriba mencionado: "... la familia está fundada de los afectos, sin ellos no hay actividad ética, ni por consiguiente relaciones jurídicas..."<sup>5</sup>. Es pues difícil pensar, que cuando se habla de familia, no se hace solo en términos de las relaciones jurídicas que surgen ante la pareja, sino la relación sentimental que en ella se entraña y que termina siendo la esencia de la estabilidad familiar.

No se debe entonces, cuando se hace referencia a la familia o a las uniones afectivas entre humanos, tener en cuenta únicamente términos estáticos e inertes de normas, puesto que la realidad va mucho más allá de estas, y el legislador deberá cada vez avanzar junto con la sociedad: pues se trata de un fenómeno que acompaña al hombre desde sus inicios al manifestar la necesidad de agruparse, constituir familia y construir sociedad.

---

4 D'AGUANNO, José. La Génesis Y La Evolución Del Derecho Civil. Madrid, La España Moderna, Pág. 240

5 Art. 2 Decreto 1260 de 190: "El estado civil de las personas deriva de los hechos, actos y providencias que lo determinan y de la calificación legal de ellos.

Refiriéndome al nacimiento mismo de la conducta colectiva del hombre, es posible identificar la naturaleza social de éste, la cual motiva indudablemente la aparición de vínculos grupales, no solo con el objeto de coordinar esfuerzos en la búsqueda de satisfactores primarios, sino también en la íntima necesidad de establecer relaciones constantes, así pues, el hombre acepta su naturaleza social y deja de vivir en soledad para sumarse a pequeños grupos que le permiten realizar funciones específicas.

La diaria convivencia humana determina, una serie de lazos y contactos de muy variada naturaleza, que validan y justifican la existencia de reglas, cayendo en la esfera del más rudimentario esbozo del derecho como instrumento regulador de las mismas, actualmente tales vínculos son definidos como relaciones jurídicas, a las cuales se les otorga la función principal de coordinar y regular a los hombres dentro de su entorno social, sirviendo para el establecimiento de contactos mutuos, aplicables a la generalidad de los individuos que conforman la población de un Estado.

Sin embargo, dichas relaciones son entabladas y sostenidas por sujetos a los cuales es necesario definir e identificar, lo que dentro de la técnica jurídica habrá de otorgar el carácter de personas, surgiendo la necesidad de dotar a tales seres humanos de características propias y perfectamente delineadas, de manera que sea posible diferenciar a todos y cada uno de ellos, debiendo dicha identificación no aplicarse únicamente a la persona por sí misma, sino que habrán de incluirse las cualidades y derechos que permitan diferenciar igualmente sus bienes y pertenencias.

Es así como el Decreto 1260 de 1970, por el cual se expide el Estatuto del Registro del estado civil de las personas, tratando de identificar en particular la situación jurídica determinada de una persona, define en su artículo primero el estado civil de las personas como su “situación jurídica en la familia y la sociedad, que determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la Ley”<sup>6</sup>; y en su artículo segundo define el origen de este estado civil.<sup>7</sup>

El Estado civil se constituye en un atributo fundamental de la personalidad, ya que ésta se encarga de identificar, entre otras funciones, a las personas y se erige con un derecho constitucional por medio del cual se defiende que toda persona, sin distinguir su condición, pueda ser sujeto de derechos y contraer obligaciones.

En relación con el estado civil es necesario anotar que, a diferencia de los demás atributos de la personalidad, que son comunes para personas jurídicas y naturales, éste sólo se predica de las personas naturales por cuanto, como es lógico, las personas jurídicas carecen de familia, factor determinante, del estado civil.

Los elementos que constituyen el estado civil son fundamentalmente la filiación, el sexo, el nombre, la edad, el estar casado o no, entre otros elementos de carácter irrenunciable, intransmisible e imprescriptible. La Ley está encargada de su determinación tal y como se encuentra consagrado en el último inciso del artículo

---

<sup>6</sup> Diario Oficial año CXXVII, No. 39615 del 31 de diciembre de 1990, Pág. 19.

<sup>7</sup> El estado civil de las personas deriva de los hechos, actos y providencias que lo determinan y de la calificación legal de ellos.

42 de la Constitución<sup>8</sup>; y éste debe estar consignado y publicado en el registro civil. Así mismo también ha determinado la carta superior que corresponde al poder legislativo, como representante en cada momento histórico de la soberanía popular, establecer las regulaciones jurídicas del estado civil, dadas las específicas situaciones sociales de cada momento.

Dentro del surgimiento de las relaciones afectivas a que hacía alusión en un principio, y como consecuencia de una realidad social determinada y el carácter evolutivo de la familia, nace la asociación parental y posteriormente se llega a la “Unión Marital de Hecho” que se establece como un híbrido entre el estado civil de soltero y el de casado, aquel en el cual no se cumple con las solemnidades del acto marital pero ese estado inicial de soltería se ve degenerado en la nueva asociación. Está definido en la Ley 54 de 1990 como “la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular” y además es una de las formas legítimas de constituir familia”<sup>9</sup>.

La “Unión Marital de Hecho” se encuentra regulada por la Ley 54 del 28 de diciembre de 1990, la cual consta de 9 artículos en los cuales *“se definen las Uniones Maritales de Hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes”*, y su artículo primero establece que *“A partir de la vigencia de la presente Ley y para todos los efectos civiles, se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una vida permanente y singular”* y cuyo contenido se ha hecho extensivo a las parejas homosexuales debido a que en un principio se hablaba de la Unión Marital entre parejas de diferente sexo, sin embargo por medio de un fallo de la

---

<sup>8</sup> COLOMBIA. Constitución de 1991. Bogotá, Legis, 2010

<sup>9</sup> COLOMBIA. Constitución de 1991. Bogotá, Legis, 2010

Corte Constitucional que generó una aguda controversia en el país, se reconocen los derechos patrimoniales de las parejas homosexuales, declarando la exequibilidad condicionada de la Ley 54 de 1990 “en el entendido que el régimen de protección en ellas contenido se aplica también a las parejas homosexuales”<sup>10</sup>.

Estableciéndose de esta forma, además el reconocimiento de distintos tipos de familia; caracterizándose estas por la permanencia y reciprocidad de obligaciones. Entre tanto, la Corte señaló la vulnerabilidad de aquellos grupos que de manera responsable quieren formar un tipo de familia ya sean monoparentales u homoparentales; quedando vulnerables frente a la legislación actual.

Como la Constitución ha considerado que corresponde al legislativo, establecer las regulaciones jurídicas del estado civil, es imperativo que se armonice en mejor forma la tensión que puede existir entre la protección del matrimonio y el derecho de las personas a reclamar su verdadera filiación.

---

10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-075 del 7 de febrero de 2007, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.



#### **4. MARCO CONCEPTUAL.**

Para poder hablar de la Unión Marital de Hecho como acto constitutivo de un pseudo estado civil, es necesario precisar ciertos conceptos conexos al mismo estado civil de las personas, relacionados con el concepto jurídico de persona y cómo llega esta a adquirir un determinado estado civil.

Existen dos clases de personas dentro de nuestro derecho positivo, cada una de ellas perfectamente delineada en cuanto a su existencia y personalidad, tales personas son la natural y la jurídica (ficta). Persona natural es el ser humano mismo, sin importar su género, raza o posición social mientras que la persona jurídica es una ficción legal constituida primariamente por un grupo de seres humanos, con el objetivo de alcanzar o cumplir fines que por su naturaleza sobrepasan las posibilidades individuales, o bien que requieren de la unión de varios sujetos para cumplir de mejor manera los objetivos a alcanzar. Así sin importar la clase de persona que se sea, toda persona es susceptible de tener derechos y obligaciones.<sup>11</sup>

Habiendo expuesto el concepto de persona, pasaré a definir el de estado civil, el cual se entiende como el atributo de la personalidad que define la situación jurídica de la persona en la familia y en la sociedad; posición de la cual se derivan, como es natural, una serie de derechos y obligaciones. En otras palabras, es la posición entre el nacimiento y la muerte que ocupa la persona en el ámbito del

---

<sup>11</sup> Apuntes Derecho de Familia. UMNG. 2.006.

derecho privado, concebida como miembro parte de una familia.<sup>12</sup>

En relación con el estado civil es necesario anotar que, a diferencia de los demás atributos de la personalidad, que son comunes para unas y otras, éste sólo se predica de las personas naturales.

Según el Decreto 1260 de 1970 en su artículo primero, vigente hasta la fecha, *"el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la Ley"*.

Es así como el estado civil se constituye como un atributo fundamental de la personalidad, ya que ésta se encarga de identificar, entre otras funciones, a las personas, y se erige con un derecho constitucional, por medio del cual se defiende que toda persona sin distinguir su condición, pueda ser sujeto de derechos y contraer obligaciones. La Corte ha definido el estado civil de esta manera:

*"El estado civil es un conjunto de situaciones jurídicas que relacionan a cada persona con la familia de donde proviene, o con la familia que ha formado y con ciertos hechos fundamentales de la misma personalidad. Igualmente, el Decreto 1260 de 1970 artículo 1, señala que el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible. Por*

---

12 Apuntes Derecho de Familia. UMNG. 2.006.

*tanto, cada acto o hecho debe ser inscrito en el correspondiente registro.” (T-963/01)*

En la Ley 54 del 28 de diciembre de 1990, se define las Uniones Maritales y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes; en su artículo primero establece que *“A partir de la vigencia de la presente Ley y para todos los efectos civiles, se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una vida permanente y singular”* y cuyo contenido se hace extensivo a las parejas homosexuales.

Se ha entendido a la Unión Marital de Hecho como la comunidad de vida entre dos personas en forma estable y más o menos duradera, con fines similares a los del matrimonio, sin que sea necesario para tal fin que se contraiga libremente matrimonio, ni que sea público y notorio.

Este concepto ha sido el resultado de la evolución natural de la sociedad, así en un principio las uniones de este carácter eran tenidas como simple concubinato, que etimológicamente viene de *“cum cubare”*<sup>13</sup>, lo cual quiere decir *“comunidad de lecho”*, la cual en sí misma da una idea vaga de permanencia en el tiempo y en el espacio. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que *“concubina”* es *“manceba o mujer que vive y cohabita con un hombre como si fuera su marido”*<sup>14</sup>. La Enciclopedia Jurídica Española, *“El concubinato o unión libre es un verdadero matrimonio reducido a la simplicidad del derecho natural*

---

13 Voz latina que expresa por sí la cohabitación de los dos sexos. (Enciclopedia Moderna, Diccionario Universal De Literatura, vol. II)

14 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario Español, 2007.

*omitiendo las solemnidades del derecho positivo”<sup>15</sup>.*

Con el propósito de proteger a los integrantes de la familia establecida por vínculos naturales, el legislador de 1990, expidió la Ley 54 y entró a definir las Uniones Maritales de Hecho como aquellas que se *“forman entre un hombre y una mujer que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”*, denominando a sus miembros compañero y compañera permanente.

Dentro de este contexto, el Constituyente de 1991 elevó a rango constitucional la protección que el legislador preconstituyente ya había otorgado a las familias constituidas por vínculos naturales, protegiendo el derecho de todo hombre y mujer a conformar una familia sin importar el origen de la misma. Al respecto, la Corte Constitucional manifestó:

*“La Unión Marital de Hecho corresponde a una de las formas legítimas de constituir la familia, la que no se crea sólo en virtud del matrimonio. La unión libre de hombre y mujer, “aunque no tengan entre sí vínculos de sangre ni contractuales formales”, debe ser objeto de protección del Estado y la sociedad, pues ella da origen a la institución familiar” (sentencia C- 098 de 1996)*

---

15 ENCICLOPEDIA JURÍDICA ESPAÑOLA, 2008.

## **5. MARCO JURÍDICO.**

Para puntualizar las características propias de la figura jurídica de la Unión Marital de Hecho, es preciso un análisis tanto de la normatividad actual como de la pasada, recurriendo a la Jurisprudencia para determinar su naturaleza jurídica y demás normas del ordenamiento jurídico para establecer su composición y aspectos generales, para lograr una comprensión en bloque de la problemática planteada.

Será la constitución política de 1991 el marco jurídico general, pues por su jerarquía de norma superior dentro del ordenamiento, resulta lógico que esta investigación se mueva dentro de los lineamientos establecidos en ella.

Tendré como referencia fundamental la Ley 54 de 1990 modificada por la Ley 979 de 2005, declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-075 de 2007 y demás modificatorias, en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales, y por la cual se definen las Uniones Maritales y régimen patrimonial entre compañeros permanentes.

Así mismo será importante hacer referencia al Decreto 1260 de 1970 mediante el cual se expide el estatuto del registro del estado civil de las personas y fundamenta la definición de estado civil y sus características como atributo de la personalidad

Respecto de la Jurisprudencia que tendré como base en el análisis del tema en cuestión trataremos las siguientes:

- Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Civil, Sentencia de 1988 Junio 22. M P. Bonivento Fernández, José Alejandro.
- Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Civil, Sentencia de 1988 Septiembre 23. M P. Romero Sierra, Rafael.
- Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Civil, Sentencia de 1990 Febrero 07. M. P. Marín Naranjo, Héctor
- Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Civil, Sentencia de 1994 Mayo 06. M. P: Jaramillo Schloss, Carlos Esteban
- Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Civil. Sentencia de 1994 Agosto 11. M. P Marín Naranjo, Héctor
- Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Civil. Sentencia de 1994 Octubre 25. M. P. García Sarmiento, Eduardo
- Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Civil. Sentencia de 2000 Marzo 07. Ponente Ramírez Gómez, José Fernando
- Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Civil. Sentencia de 2000 Septiembre 20. M. P. Trejos Bueno, Silvio Fernando
- Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Civil. Sentencia de 2001 Noviembre 16. M. P. Ardila Velásquez, Manuel
- Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Civil. Sentencia de 2001 Diciembre 12. M. P. Santos Ballesteros, Jorge

- Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Civil. Sentencia de 2002 Noviembre 29. M. P. Ardila Velásquez, Manuel
- Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Civil. Sentencia de 2003 Febrero 12. M. P. Ardila Velásquez, Manuel
- Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Civil. Sentencia de 2003 Septiembre 10. M. P. Ardila Velásquez, Manuel
- Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Civil. Sentencia de 2003 Octubre 28. M. P. Valencia Copete, César Julio
- Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Civil. Sentencia de 2004 Noviembre 18. M. P. Valencia Copete, César Julio
- Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Civil. Sentencia de 2004 Noviembre 25. M. P. Munar Cadena, Pedro Octavio
- Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Civil. Sentencia de 2003 Marzo 20. M. P. Castillo Rugeles, Jorge Antonio
- Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Civil. Sentencia de 2004 Marzo 09. M. P. Munar Cadena, Pedro Octavio
- Corte Suprema De Justicia Sentencia No. 268 De 28 De Octubre De 2005, Exp. 2000-00591-01.
- Corte Suprema De Justicia Auto No. 028 de 30 de Enero de 2006. Expediente 2005-01595-00.
- Corte Suprema De Justicia Auto No. 179 de 9 de Agosto de 2005. Expediente 1999-00042-01.

- Corte Suprema De Justicia Auto No. 247 de 1º de Noviembre de 2004, Expediente 00773.
- Corte Suprema De Justicia Auto No. 266 Sala de Casación Civil. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar, Junio 18 de 2008. Referencia: C-0500131100062004-00205-01
- Corte Suprema De Justicia Sentencia 067, del 5 De Octubre De 1999. M.P. José Fernando Ramírez Gómez.
- Corte Suprema De Justicia Auto No. 125 De 2008
- Corte Constitucional Sentencia C-174 De 1996
- Corte Constitucional Sentencia C-098 De 1996
- Corte Constitucional Sentencia T 326 De 1993
- Corte Constitucional Sentencia T-377 De 1995
- Corte Constitucional Sentencia C-109 de 1995
- Corte Suprema De Justicia Auto No. 205 De 2008

Todas estas hacen referencia a las distintas hipótesis que se han manejado acerca de la “Unión Marital de Hecho”, hasta llegar a la actual postura Jurisprudencial de reconocer que esta tiene la virtud de establecer o modificar el estado civil de quienes hacen parte de ella y que al igual que el matrimonio, es creadora de una especie de estado civil, un pseudo estado civil.

## **6. JUSTIFICACIÓN.**



*"La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla (...)"* <sup>16</sup>. El nacimiento de la familia se entiende entonces desde el momento en que una pareja decide conformarla, bien sea con el cumplimiento de las formalidades legales que originan el vínculo jurídico o desde la ejecución de actos idóneos que han de presumir el surgimiento de la relación familiar.

Radica en cabeza del Estado la protección integral a la familia por ser esta el núcleo fundamental de la sociedad. Dentro de las funciones del Estado como protector de tal institución están entre otras las de velar por los derechos de los integrantes de estas células, haciendo prevalecer sobre todo la igualdad de estas instituciones ante la Ley, pues si todos los individuos de la sociedad gozan de esta igualdad es obvio que debe protegerse respecto de la familia.

La Constitución Política<sup>17</sup> protege a la familia conformada a partir de vínculos jurídicos así como naturales, por considerar que este fenómeno tiene implicaciones de orden social fundamental, dándole así el mismo tratamiento que le da a la familia constituida por el vínculo del matrimonio sin hacer discriminaciones de ningún orden y garantizando el mismo plano de igualdad a cada uno de sus miembros, como a las situaciones jurídicas que los afectan.

Dentro de este tratamiento de igualdad, no obstante ha existido cierto trato diferencial y hasta discriminatorio (en forma negativa) respecto de la situación

---

<sup>16</sup> Artículo 42. Constitución Política de Colombia. 1.991.

<sup>17</sup> COLOMBIA. Constitución de 1991. Bogotá, Legis, 2010

jurídico legal de las familias que han sido formadas por vínculos naturales que riñe con el espíritu de la norma superior, por cuanto mientras los estados de casado o soltero gozan de plena reglamentación y reconocimiento ante el ordenamiento jurídico, las familias conformadas por Unión Marital de Hecho carecen de tal regulación debido a que la existente ha resultado insuficiente para la protección integral de los derechos de los vinculados por medio de esta institución familiar.

En Colombia, la familia extramatrimonial, conformada sin un vínculo matrimonial entre hombre y mujer que se comportan como esposos, solamente hasta la entrada en vigencia de la Ley 54 de 1990 adquirió una igualdad ante la Ley y principalmente respecto de los hijos nacidos como fruto de tales uniones. El antiguo artículo 329 del Código Civil<sup>18</sup> suponía que se tendría por concubina de un hombre a *“la mujer que vive públicamente con él, como si fueran casados, siempre que uno y otro sean solteros o viudos”*. Adicionalmente existía también el concepto de las uniones punibles, especialmente las establecidas entre mujeres casadas y hombres diferentes a sus maridos, o entre maridos y mujeres diferentes a sus esposas, o entre hombre y mujer que no podían casarse entre sí, en razón del vínculo de parentesco que se denominaban hasta la expedición de la Ley 45 de 1936 ayuntamientos dañados y punibles, denominación que se le dio por considerarse que su establecimiento implicaba la comisión de un ilícito punible por la Ley penal pues las unas constituían adulterio y las otras incesto.

La clasificación de las uniones extramatrimoniales en el Código Civil tenía fundamental importancia, por los diversos efectos que se les otorgaba en relación con los hijos procreados en ellas. Los nacidos de uniones dañadas y punibles recibían el nombre de hijos de dañado y punible ayuntamiento, y según el antiguo

---

18 COLOMBIA. Código Civil, Editorial Legis, Bogotá, 2010

artículo 52 ibídem, estos eran los adulterinos y los incestuosos; en cambio los nacidos de unión extramatrimonial no dañada ni punible recibían el nombre de hijos naturales. La Ley 45 de 1936 suprimió la categoría de hijos de dañado y punible ayuntamiento y derogo en consecuencia la clasificación de las uniones extramatrimoniales en concubinatos punibles o no punibles. Así pues, la Ley mencionada toma las siguientes aproximaciones: *“la unión de un hombre y una mujer sin vínculo matrimonial se denominará Unión Marital (antes concubinato), y el hombre y la mujer que la forman, compañeros permanentes (también convivientes); los hijos nacidos de tales uniones recibían el nombre de naturales”*, según la terminología del Código Civil y de las Leyes 45 de 1936 y la Ley 75 de 1968; hoy en día reciben el nombre de extramatrimoniales.

*“La familia extramatrimonial surge de la unión, sin vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer que se comportan ante los demás como esposos”*. Así define el Doctrinante Arturo Valencia Zea<sup>19</sup> a la familia conformada entre un hombre y una mujer, sin estar casados, pero que conforman una comunidad de vida singular y permanente. La Ley 54 de 1990, le otorga carácter de institución jurídica de orden legal, suprimiendo toda connotación negativa a dicha relación. Este es un fenómeno que se ha vuelto bastante común en las familias de la sociedad moderna, ya que, los vínculos religiosos y formales se han vuelto innecesarios para conformar una familia que se encuentre en igualdad de condiciones a las legalmente conformadas ante la Ley.

De esta manera la Unión Marital de Hecho, no puede ser de igual trato al matrimonio, si bien es cierto que no es una relación cualquiera, no es algo que sea externo a las personas que la conforman, por el contrario, trasciende a ellas, es

---

19 VALENCIA ZEA Arturo y ORTIZ MONSALVE, Álvaro. Derecho Civil: Derecho de Familia; Ed. Temis S.A., Bogotá. 1995.

decir, a la pareja misma y a cada uno de sus miembros individualmente considerados, con cierto status jurídico en la familia y la sociedad, no cumple con el requisito sine cuanon de haber sido reconocido y determinado por la Ley.

Resulta importante aportar las críticas que se han planteado en relación de la real igualdad que existe ante la Ley entre la Unión Marital de Hecho y el matrimonio. Al respecto, se ha considerado que aunque la Ley 54 de 1990 pretende proteger a los compañeros permanentes no resulta coherente que la misma exija que deben transcurrir dos años para que se configure la Unión Marital ante la Ley, ya que, ésta nada dice respecto de las uniones que tienen una duración menor al lapso establecido por el legislador. De aquí se anota que aunque no se pone en duda que este requisito de estabilidad deba existir, el legislador no tiene ningún fundamento real para establecer un término que no se compagina con la realidad.

Generalmente cuando un hombre y una mujer deciden, con fundamento en su libertad constitucional, responsablemente formar una familia y tener una comunidad de vida sin unirse en matrimonio, la permanencia de la unión es necesaria y elemento esencial de esa nueva situación jurídica.

Esta discusión es de suprema importancia, porque, aunque la realidad legal no parece representar dicha aceptación social respecto de las Uniones Maritales, ya que, desde la entrada en vigencia de la Ley 54 de 1990 se han presentado un sinnúmero de tutelas aduciendo la existencia de una real desigualdad en el tratamiento de la sociedad ante los compañeros permanentes frente a los cónyuges, tampoco se ha reglamentado una esa nueva pretensión, todo bajo la perspectiva de la inseguridad jurídica que conlleva el reconocimiento de dicha

situación como un estado civil y la transferencia de obligaciones a aquellas parejas que veían en esta forma de unión una salida a los deberes y obligaciones que dicho status de “estado civil” les puede generar.

En los últimos años la Jurisprudencia le ha brindado especial atención a la figura de la Unión Marital de Hecho, reconociendo algunos derechos a los compañeros permanentes. Es por esto que, a mi parecer, es interesante analizar de manera especial, el por qué del no equiparamiento legal en materia del estado civil.

A través de esta monografía realizo algunas reflexiones sobre la problemática que se presenta a nivel jurídico con la Unión Marital de hecho y que afecta de manera directa y ostensible a los denominados compañeros permanentes.

Es necesaria la regulación de compañero permanente como un pseudo estado civil, por ser la Unión Marital una de las formas impropias de constituir familia que por falta de regulación y además, por tener un fin primordialmente distinto al de la institución del matrimonio, precisa reglamentación efectiva para la protección de los miembros de la sociedad que constituyen familia en este particular.

## **7. OBJETIVOS.**

### **OBJETIVO GENERAL:**

- Exponer de forma clara y detallada, el porqué de la necesidad del reconocimiento de la Unión Marital de Hecho como pseudo estado civil.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Definir y precisar el concepto de persona en el ordenamiento jurídico colombiano
- Analizar las distintas formas de crear familia que han sido reconocida por nuestra normatividad
- Determinar el significado de estado civil de las personas y su efecto sobre estas.
- Estudiar el concepto de “Unión Marital de Hecho” y su evolución a lo largo del desarrollo de nuestro ordenamiento jurídico.
- Evaluar la postura Doctrinal y Jurisprudencial de las diferentes Cortes respecto del tema.

## **CAPÍTULO 1.**

### **DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS**

#### **1.1. Generalidades.**

El estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, que determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones; es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la Ley. El estado civil de las personas deriva de los hechos, actos y providencias que lo determinan y de la calificación legal de ellos.<sup>20</sup>

Se puede definir el estado de una persona, siguiendo a Salvat<sup>21</sup> como el *“conjunto de sus cualidades no patrimoniales que establecen su posición tanto individual como dentro de la familia, que lo colocan en un rol social”*. El estado civil es uno de los atributos de la personalidad, y como tal es intransmisible, inalienable, imprescriptible, indivisible e irrenunciable. Tiene además una característica propia, ya que es recíproco, pues a su estado le corresponde el de otra persona con la cual se relaciona a través de dicho estado, por ejemplo, para ser esposo, otra persona debe tener el estado de esposa suya. Con respecto al estado de soltero, es por ausencia de esposo o esposa.

El que posee un estado determinado goza de la posibilidad de hacer valer las acciones de estado (para ser reconocido o para impugnar un estado) genera

---

<sup>20</sup> Decreto 1260 de 1970.

<sup>21</sup> <http://www.buenastareas.com/temas/oparin-salvat/620>

vocación hereditaria, derecho a la tutela y curatela legítimas, aunque también impone restricciones y obligaciones.

El Registro Civil se ha creado para dar certeza mediante su inscripción del estado de las personas. Allí deben inscribirse los matrimonios, los nacimientos, los divorcios, las defunciones.

## **1.2. Necesidad de hablar de un pseudo estado civil en Colombia**

Teniendo en cuenta que hemos definido el estado civil de las personas como la relación que la persona individual guarda con su familia, con el Estado y consigo misma y que bajo la legislación colombiana, y en especial el último inciso del artículo 42 de la Constitución<sup>22</sup>, el cual reza: *"La Ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes"*. Corresponde al legislador el papel de creación de determinado estado civil.

Esta creación del estado civil, debe obedecer a las diferentes características sociales y culturales determinantes para una época definida. Por esta razón, y debido a la creciente formación de familias basadas en vínculos naturales, se precisa del legislador la regulación sobre la Unión Marital de Hecho, pues aun cuando se han introducido cambios que tienden a darle a esta un tratamiento jurídico equiparable al del matrimonio y Jurisprudencialmente se le ha dado la característica de crear o modificar el estado civil, para que este reconocimiento sea efectivo, es

---

22 COLOMBIA. Constitución de 1991. Bogotá, Legis, 2010



necesario discernir la voluntad de los compañeros permanentes al momento de conformar su tipo de familia y los deberes que esta conlleva.

En aras de demostrar la necesidad de establecer el seudo estado civil de compañero permanente en la sociedad colombiana, estudiaré la evolución y alcance de la Unión Marital de Hecho así como su desarrollo Jurisprudencial, aspectos que exponen con claridad el porqué de su diferenciación y nada cercana equiparación.

## **CAPÍTULO 2.**

### **DEL CONCUBINATO A LA “UNIÓN MARITAL DE HECHO”**

Además de la familia matrimonial, cuya fuente es el matrimonio, existe también la familia extramatrimonial que surge de la unión sin vínculo matrimonial, entre un hombre y una mujer que se comportan ante los demás como esposos, fenómeno que por cierto es frecuente. Tanto en las uniones matrimoniales como en las que se forman al margen del matrimonio, suelen cumplirse unas mismas finalidades: procreación de hijos, sustentación de estos, fidelidad mutua, obligación de socorro y ayuda, etc. La unión de un hombre y de una mujer sin vínculo matrimonial se llama, según la Ley 54 de 1990, “Unión Marital de Hecho”, antes concubinato, y el hombre y la mujer que la forman, compañeros permanentes.

En los términos contenidos en la Carta Política de 1991<sup>23</sup>, se ampara a la familia como la institución básica de la sociedad, lo que conduce a procurar un modelo de sociedad basado en los principios de la unidad familiar, construido desde la responsabilidad entre sus miembros, el cumplimiento de los deberes de cada uno y la satisfacción de las necesidades de todos sus integrantes. Esto implica necesariamente el reconocimiento de la realidad sociológica colombiana de las relaciones familiares, que comprende entre otras las relaciones maritales de hecho, las que como ha señalado la Jurisprudencia no sólo cumplen una función de carácter espiritual, sino de carácter material con relación a los miembros que la integran.

---

23 COLOMBIA. Constitución de 1991. Bogotá, Legis, 2010

Sin embargo, ha sido arduo el camino que ha recorrido el fenómeno de la Unión Marital de Hecho, así podemos ver cómo bajo la Constitución de 1863<sup>24</sup>, el único matrimonio válido era el contemplado en la Ley y se refería al matrimonio civil. Ninguna otra forma de constituir familia era aceptada, ni siquiera socialmente. A la luz de la Constitución de 1886<sup>25</sup> se dictó la Ley 153 de 1887 en el mismo sentido de la de 1863, y sólo hasta 1990 se reguló el fenómeno social de la convivencia permanente de la pareja que se conocería como “Unión Marital de Hecho”, por considerarse desde entonces como fuente de familia, con efectos jurídicos y patrimoniales.

Dentro de este contexto, el Constituyente de 1991 elevó a rango constitucional la protección que el legislador preconstituyente ya había otorgado a las familias constituidas por vínculos naturales, protegiendo el derecho de todo hombre y mujer a conformar una familia sin importar el origen de la misma. Al respecto, la Corte Constitucional manifestó:

*“La Unión Marital de Hecho corresponde a una de las formas legítimas de constituir la familia, la que no se crea sólo en virtud del matrimonio. La unión libre de hombre y mujer, “aunque no tengan entre sí vínculos de sangre ni contractuales formales”, debe ser objeto de protección del Estado y la sociedad, pues ella da origen a la institución familiar” (sentencia C- 098 de 1996)*

La existencia de estas uniones constituye un hecho social que se ha observado en todos los países y en todas las épocas, y de ahí que el legislador que quiera

---

24 Constitución Política de Colombia, 1863.

25 Constitución Política de Colombia, 1886.

realizar interpretaciones sobre los datos emitidos por la realidad social, debe reglamentar los efectos que producen, así lo han entendido tanto los legisladores antiguos como los modernos.

## **2.1. Concubinato en el Derecho Colombiano**

El Código de 1873<sup>26</sup>, denominaba concubina "la mujer que vivía con un hombre públicamente, como si fueran casados, siempre que uno y otro sean solteros o viudos". Este concepto correspondía con el de hijo natural que era habido fuera de matrimonio de personas que podían casarse entre sí al tiempo de la concepción cuyos hijos han obtenido el reconocimiento (Artículo 52).

El legislador de 1887 consideró en forma severa y excluyente tanto la familia natural como el concubinato. La Ley 19 de 1890 (Código Penal Colombiano) estableció como delitos el adulterio de la mujer, el amancebamiento del marido y el incesto, habiéndose derogado las dos primeras y subsistiendo la última luego de haber expedido el Código de 1936. El artículo 451 del Código Penal derogado, definía el delito de amancebamiento como "el hecho de que dos personas de diferente sexo, sin ser casadas hicieran vida como tales, en una misma casa de manera pública y escandalosa".

Por su parte, la Ley 45 de 1976 estableció en el artículo 4 que hay lugar a declarar judicialmente la paternidad: "(...) 4. *En el caso en que el presunto padre y la madre hayan existido de manera notoria, relaciones sexuales estables, aunque no hayan tenido comunidad de habitación y siempre que el hijo hubiere nacido después de*

---

<sup>26</sup> Ibidem.

*ciento ochenta días contados desde que empezaron tales relaciones o dentro de los trescientos días siguientes a aquel en que cesaron".* Si bien, la Ley 45 se inspiró en la Ley del 16 de noviembre de 1912 francesa, no consagró el concubinato notorio dentro del período legal de la concepción, como lo hizo el artículo 4 de esta Ley.

El Código Sustantivo del Trabajo tuvo en cuenta a los hijos naturales para llamarlos a ocupar un puesto como herederos en algunos casos de prestaciones laborales o sociales de su padre (Artículo 204, inciso final en consonancia con los artículos 212, 214, 216, 231, 258, 275, 285, 293, y 294 del mismo Código) La Ley 90 de 1946 estableció el Seguro Social obligatorio y creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. En cuanto al concubinato, reconoció efectos jurídicos por cuanto, en caso de muerte producida por accidente o enfermedad, dispuso el artículo 55 que a falta de viuda se tenga en cuenta: *"a. La mujer con quien el asegurado haya hecho vida marital durante los tres años y medio anteriores a su muerte, o con quien haya tenido hijos siempre que ambos hubiesen permanecido solteros durante el concubinato".*

El artículo 6 de la Ley 75 de 1968 no consagró el concubinato para asumir la paternidad, sino que se limitó a exigir: *"4. En el caso en que entre el presunto padre o la madre hayan existido relaciones sexuales en la época en que según el artículo 92 del Código Civil pudo tener lugar la concepción; dichas relaciones podrán inferirse del trato social y personal entre el padre y la madre, apreciado dentro de las circunstancias en que tuvo lugar y según sus antecedentes y teniendo en cuenta su naturaleza, intimidad y continuidad".*

Posteriormente la Ley 54 de 1990, en donde se determina el alcance y los efectos de la Unión Marital de Hecho, define este tipo de uniones, con esta dejan de ser simplemente concubinatos.

El artículo 42 de la Constitución de 1991 consagró un concepto amplio de familia que comprende la legítima, la natural o consensual, y la adoptiva. En efecto, en su primer inciso dice: *"La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla". El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia, sin tener en cuenta la forma como se ha constituido". (Artículo 42, inc. 2 Constitución Política.)*

## **CAPÍTULO 3.**

### **REGLAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA UNIÓN MARITAL.**

#### **3.1. Unión Marital y la Constitución Política de Colombia.**

La Constitución de 1991 es amplia en la consagración de derechos, basada en los principios de igualdad, garantías, equidad, libertad y justicia, el preámbulo que hace parte de la Carta Política y es principio fundamental que rige la dogmática constitucional establece los derechos fundamentales de igualdad y justicia.

En la Asamblea Nacional Constituyente, se pone de presente a la Unión Marital de Hecho como la unión libre de hombre y mujer, la cual corresponde al caso de la familia que se origina por la *"voluntad responsable de conformarla"*, las propuestas y debates alrededor de adaptar la normatividad jurídica sobre la familia a la realidad social existente, fue una necesidad planteada:

*"No es necesario discutir -expresa la ponencia- porque la familia es el núcleo, principio o elemento fundamental de la sociedad. Se reconoce a ella este lugar de privilegio dentro de la escala social porque todos deberíamos nacer, vivir y morir dentro de una familia. Las personas unidas entre sí por vínculos naturales como los diferentes grados de consanguinidad o unidas por vínculos jurídicos, que se presentan entre*

*esposos, afines, o entre padres e hijos adoptivos o por la voluntad de constituirlos, en los casos en que un hombre y una mujer se unen con la decisión de vivir juntos tiene pleno derecho de conformar y desarrollar esta base de la sociedad, aunque no tengan entre sí vínculos de sangre ni contractuales formales, si llenan los requisitos de la Ley, su conciencia, sus costumbres o tradiciones, su religión o sus creencias”.*

Siendo así, es apenas obvio determinar la protección del Estado y la sociedad para esa familia y fijar la inviolabilidad de su honra, dignidad e intimidad, así como sentar las bases de su absoluta igualdad de derechos y deberes.

Interpretando una necesidad nacional debe reflejarse en la Constitución la realidad que vive hoy más de la cuarta parte de nuestra población. Se deben complementar las normas legales vigentes sobre "Uniones Maritales y régimen entre compañeros permanentes". En la generación de la primera década de este siglo, se encuentra un 10% de las familias en esta situación; en la generación del 40 encontramos un 26%, en la del 50 pasa al 30% y en la del 60 al 64 asciende a un 45.5% según lo indica la obra "la nupcialidad en Colombia, evolución y tendencia de las investigadores Lucero Zamudio y Norma Rubiano"<sup>27</sup>

Como resultado del debate realizado en la constituyente, se dio reconocimiento en la Carta Política a la realidad social de la unión de hecho; así quedó plasmado en el artículo 42 de la Carta, el cual menciona en su inciso primero "(...) *que la institución familiar, como núcleo fundamental de la sociedad, podía constituirse por vínculos*

---

<sup>27</sup> GACETA CONSTITUCIONAL, Nro. Informe Ponencia para primer debate en Plenaria. En Revista Jurisprudencia y Doctrina. Vol. XXVI, Nro. 311 Noviembre de 1997, Bogotá. Pág. 5.



*naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla".*

Hoy, ante el criterio de la vigente Constitución y a diferencia de lo que ocurría en tiempos pasados puede la Corte tomar una posición con suficiente certeza, puesto que en el artículo mencionado aparece claro entonces que el Estado colombiano reconoce y promete proteger tanto la familia matrimonial como la extramatrimonial siempre que ésta, según el constituyente, sea formada por un hombre y una mujer, que lo hagan de manera responsable, seria, y asumiendo las obligaciones que implica formar parte de un grupo familiar. Es decir, la Carta protege la familia extramatrimonial en cuanto llene las características de la familia matrimonial, aduciendo que para serlo solo faltaría el vínculo conyugal.

Entonces, la situación reconocida por la legislación, por el derecho comparado y por la Jurisprudencia contencioso administrativa y penal encuentra un fundamento sólido en la Constitución Política de 1991, en cuanto reconoce la familia extramatrimonial y ordena darle un tratamiento igual al que se le da a la familia matrimonial.

Es en este punto del tratamiento de igualdad donde se pone de presente la crítica realizada con respecto a la familia constituida por vínculos jurídicos (matrimonio), respecto de los compañeros permanentes, es incuestionable que no puede recibir un tratamiento jurídico semejante a aquel.

Del contexto se desprende que tres son los presupuestos fundamentales para reconocerla como una situación jurídica que debe tratarse **con** distinción. La licitud,

permanencia y estabilidad de la familia, presupuestos que se advierten en la familia matrimonial, y que en cuanto aparezcan en la Unión Marital de Hecho dan pie para encontrar la familia extramatrimonial que reconoce la Carta Política de 1991.

### **3.2. “Unión Marital De Hecho” y la Ley 54 de 1990”**

En el año de 1990 el legislador pareció entender que un sinnúmero de parejas colombianas que por diversas situaciones de orden social y de orden jurídico no han querido o no han podido contraer matrimonio, debían tener una regulación jurídica especialmente en materia de bienes, promulgando así la Ley 54 de ese año, por la cual se definen las “Uniones Maritales de Hecho” y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes

#### **3.2.1. Noción de “Unión Marital de Hecho”**

El artículo primero de la Ley 54 de 1990 define legalmente lo que es una “Unión Marital de Hecho”: *“A partir de la vigencia de la presente Ley y para todos los efectos civiles, se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente para todos los efectos civiles, se denomina compañero y compañera permanente, al hombre y a la mujer que forman parte de la Unión Marital de Hecho”*. De esta definición que se desprende que el hombre y la mujer que forman parte de la “Unión Marital de Hecho”, se les denominará compañero y compañera permanente.

La misma Ley, le otorga carácter de institución jurídica, de orden legal, a la unión extramatrimonial entre un hombre y una mujer (ahora extensiva a las parejas homosexuales), y suprime toda connotación despectiva, degradante, y que algunos de manera intransigente llegaron a tildar de contraria a la moral social.

Define la unión extramatrimonial como “Unión Marital de Hecho”; definición de carácter vinculatorio, por ser de significado legal (Código Civil artículo 28); igualmente define los sujetos de esa unión como compañeros permanentes. Consecuencia de lo anterior es que estas y no otras son las denominaciones que deben darse a la unión extramatrimonial y a quienes la forman; las palabras concubinato y concubinos, que traían aparejado un sentido despectivo, no se deben emplear y deben ser utilizadas en los términos legales “Unión Marital de Hecho” y compañero permanente.

Desde la realidad misma donde se conforma la familia, a la Unión Marital de Hecho se le da un tratamiento discriminatorio a los compañeros permanentes por el mero hecho de no estar casados a pesar de vivir juntos, auxiliarse mutuamente de acuerdo a lo prescrito en el artículo 113 de Código Civil colombiano y lo insinuado en el artículo 3 de la Ley 54 de 1990 que estatuye que la mitad del patrimonio de la sociedad patrimonial le corresponde a cada uno de los compañeros permanentes, violándose así con este comportamiento lo preceptuado en el artículo 5 de la Constitución Política que dice: *"El Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara la familia como institución básica de la sociedad"*; y en el mismo sentido el artículo 13 de la misma normatividad expresa: *"Todas las personas*

*nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la misma protección y el trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica"* y de paso, se viola también el preámbulo de la Constitución Política al no fortalecer la igualdad en el trato a la Unión Marital en relación con el matrimonio.

La Unión Marital debe tener los mismos derechos, en cuanto a sus **efectos** patrimoniales que los matrimonios contraídos mediante rito religioso o acto civil a los cuales el Estado le reconoce dichos efectos.

Desde la realidad donde se conforma la familia la Ley 54 de 1990 le da un trato discriminatorio a esta institución marital.

### **3.2.2. Requisitos de La “Unión Marital de Hecho”.**

De la definición consagrada en la Ley 54 de 1990, se infieren los siguientes requisitos:

**Requisitos de Validez:** Que el hombre y la mujer no se encuentren casados, que hagan una comunidad de vida permanente y singular, que haya una capacidad núbil, esto quiere decir, que la mujer y el varón sean mayor de 14 años<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> En relación con las definiciones establecidas en el artículo 34 del código civil, se debe tener en cuenta lo dispuesto por el párrafo del artículo 53 de la ley 1306 de 2009, el cual establece:

ARTÍCULO 53: (...) 'PARÁGRAFO. Para todos los efectos legales el impúber se equipara al niño y niña definido en el artículo 3o del Código de la Infancia y Adolescencia. De igual manera, el menor adulto se equipara al adolescente de

Además se necesita de una declaración de voluntad expresa o tácita, la primera puede ser verbal o escrita, este escrito puede ser un documento privado o público. Se puede pensar que se haga por escritura pública y se inscriba en el registro civil. También puede ser tácita, que es la que surge de los hechos mismos, esta se da con mayor frecuencia en la conformación de la Unión Marital. La Ley no exige ninguna solemnidad para la declaración de voluntad.

### **3.2.3. Prueba de La “Unión Marital de Hecho”**

*Artículo 4 “(...) la existencia de la Unión Marital de Hecho se establecerá por los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil y será de conocimiento de los jueces de familia en primera instancia”.*

Frente a este punto se ha planteado por la Doctrina una serie de interrogantes ¿La sentencia judicial es el único medio de prueba para la existencia de una sociedad patrimonial marital entre compañeros o por el contrario pueden los interesados aceptarla voluntariamente ante Notario?

En nuestro medio, Doctrinariamente hablando existen dos posiciones con relación al punto:

---

ese estatuto.

Con todo, la edad mínima para contraer matrimonio se mantiene en 14 años, tanto para los varones como para las mujeres.

Una parte de la Doctrina plantea que, los interesados pueden aceptar la existencia de su sociedad patrimonial marital por acuerdo elevado a escritura pública; otra parte de la Doctrina dice, que en todos los casos se necesita sentencia judicial.

Para tratadistas como el profesor Pedro Lafont Pianneta<sup>29</sup>, *"para la comprobación de la existencia de la sociedad patrimonial marital, es absolutamente necesario la sentencia judicial, que es el acto que le da certeza; excepcionalmente esta no se requiere en el caso en que los compañeros, antes de la iniciación de la unión hayan celebrado capitulaciones maritales, evento en el cual estas regulan íntegramente los efectos de orden económico siempre y cuando en las capitulaciones no exista controversia alguna, de lo contrario habrá de acudirse a la declaración judicial pertinente"*. Siempre y cuando dicho reconocimiento o aceptación, hecha por los interesados, si bien no le da plena certeza jurídica a la existencia de dicha sociedad, puede ser importante, porque tal aceptación además de ser una confesión documental, contendría una presunción de causa.

El anterior criterio no es compartido por algunos tratadistas como Valencia Zea<sup>30</sup>, que sostienen que el único medio de prueba para la existencia de la sociedad patrimonial marital es la sentencia judicial.

Por lo que se puede decir que resulta indispensable para que adquiera certeza y eficacia jurídica la sociedad patrimonial marital, que esta sea declarada judicialmente mediante sentencia. La exigencia se encuentra consagrada en el

---

29 LAFONT PIANETTA, Pedro. LAFONT PIANETTA, Pedro, Derecho de Familia- Unión Marital de Hecho, Tercera Edición, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, Colombia, 2001.

30 VALENCIA ZEA Arturo y ORTIZ MONSALVE, Álvaro. Derecho Civil: Derecho de Familia; Ed. Temis S.A., Bogotá. 1995.

encabezamiento del artículo 2º de la Ley 54 de 1990 cuando preceptúa que “*se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos (...)*”

La decisión judicial no tiene una naturaleza constitutiva sino declarativa, esto porque la declaración le da certeza jurídica a la sociedad patrimonial, ello obedece a que la certeza jurídica mencionada no es requisito esencial para la existencia sino para la seguridad jurídica.

Antes de la declaración mediante sentencia judicial la sociedad patrimonial tiene existencia por si misma desde el momento en que se reúnan las condiciones prescritas para ello, aun cuando no haya sido declarada judicialmente y por lo tanto, también carezca de la referida certeza jurídica. Luego se tratara de una sociedad existente pero incierta ante el derecho y por lo tanto sin los efectos jurídicos que le otorga.

De allí que con la sentencia no nazca la sociedad patrimonial como tal, pero si se adquiere certeza y seguridad jurídica con ella. Por lo tanto dicha decisión judicial le otorga certeza pero declarativamente.

#### **3.2.4. Naturaleza Jurídica de La “Unión Marital de Hecho”.**

La causa misma de la “Unión Marital de Hecho”, consiste en el fin perseguido por la unión: la procreación, la fidelidad, el respeto y la ayuda mutua.

Pedro Lafont Pianneta<sup>31</sup>, dice *“que la naturaleza fáctica indica que la Unión Marital, es considerada como un hecho jurídico familiar especial, es decir voluntario de constitución familiar reconocido por el derecho, razón por la cual se califica de hecho”*.

### **3.2.5. Elementos de la Unión Marital.**

**Cohabitación:** que el hombre y la mujer que van a conformar una Unión Marital de Hecho vivan bajo el mismo techo, y que esta sea conocida por todos o un grupo de personas, esto quiere decir que esta sea pública.

**Singularidad:** quiere decir que sea una relación monogámica (según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 54 de 1990)

**Permanencia:** quiere decir, que esta unión sea más o menos duradera (que esta se halla dado por un lapso no inferior a 2 años según lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley)

### **3.2.6. Efectos Jurídicos**

En la actual legislación colombiana toda Unión Marital ha de producir efectos jurídicos de distinta naturaleza. Los efectos jurídicos son de orden personal y

---

<sup>31</sup> LAFONT PIANETTA, Pedro. LAFONT PIANETTA, Pedro, Derecho de Familia- Unión Marital de Hecho, Tercera Edición, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, Colombia, 2001.



económico, lo que hace que sus consecuencias sean de naturaleza civil. Los efectos jurídicos de orden personal comprenden los relativos al vínculo marital, deberes, derechos y responsabilidades. Los efectos jurídicos de orden económico se derivan de los aspectos económicos relacionados con las cargas del hogar, y en definitiva, resolver los aspectos económicos de su relación.

#### **3.2.6.1. Efectos de orden personal**

Como podrá verse, los efectos de orden personal no se encuentran expresamente regulados en la norma. Sin embargo, la carencia de regulación no implica la voluntad de excluir lo pertinente a los efectos personales de la Ley 54 de 1990, por el contrario, señala una forma diferente de regulación, y que a partir de la Constitución de 1991, la Corte Constitucional ha realizado una labor de interpretación a partir de los principios constitucionales.

Sin embargo, es sostenido por un grupo minoritario de la Doctrina que la Unión Marital no genera efectos personales, sino únicamente patrimoniales, los cuales se encuentran condicionados al artículo 2° de la Ley 54 de 1990, mediante el cual se establece la siguiente disposición:

*“Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: Cuando exista Unión Marital de Hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio, y cuando exista una Unión Marital de Hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer*

*matrimonio por parte de uno o ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la Unión Marital de Hecho.”*

La Ley es clara en establecer que para que surja la sociedad patrimonial debe primero haberse declarado la existencia de la Unión Marital, pues sin ella debidamente constituida, no hay lugar a hablar de los efectos patrimoniales que surgen de esta. Entre los compañeros permanentes la sociedad patrimonial solo se presume y hay lugar a declararla judicialmente cuando la Unión Marital ha durado por un lapso superior a dos años. La Ley se encargó de definir la Unión Marital y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes, con especificación expresa de las condiciones que deben darse en cada caso para que se pueda presumir la existencia de la sociedad patrimonial con fundamento en dicha unión.

Así no aparezca consagración legal expresa sobre los derechos personales que deben existir en la Unión Marital, los compañeros permanentes se deben solidaridad y para lograrlo deben acceder a todos los mecanismos posibles.

Los efectos de orden personal comprenden los relativos al vínculo marital, deberes, derechos y responsabilidades, hogar familiar y los relativos frente a la comunidad<sup>32</sup>.

### **3.2.6.2. Efectos Patrimoniales**

---

32 COLOMBIA, Código Civil, Art. 1774.

El principal efecto económico de la Unión Marital es la presunción de existencia de la sociedad patrimonial, después de cumplidos dos años de iniciada la convivencia marital. En el matrimonio nos encontramos con el surgimiento de una sociedad conyugal, y en la Unión Marital con la sociedad patrimonial<sup>33</sup>.

Frente al tema de los derechos patrimoniales que surgen a partir de la conformación de la Unión Marital, los cuales tuvieron reconocimiento expreso por medio del mandato legislativo de la Ley 54 de 1990, se pronunció la Corte Suprema de Justicia reiteradamente por medio de fallos unánimes: “Es de advertir que el legislador al promulgar esta disposición se orientó por la necesidad de implantar una norma que regulara las relaciones concubinarias, fuente de la familia natural, no solamente en relación con los derechos y deberes de los concubinos entre sí, sino también en cuanto a los derechos patrimoniales que puedan originarse en tal relación, norma que se compagina con el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 en el que se reconoce como fuente de la familia no solamente al matrimonio, sino que también puede tener su origen en la voluntad responsable de conformarla por parte de un hombre y una mujer, lo que significa que el estado colombiano reconoce y promete proteger tanto a la familia matrimonial como a la extramatrimonial, siempre que ésta última sea formada por un hombre y una mujer que lo hagan de manera responsable y seria y asumiendo las obligaciones que implican formar parte de un grupo familiar, de tal manera que para configurar la familia matrimonial solamente faltara el vínculo conyugal.”<sup>34</sup>

---

33 COLOMBIA, Ley 54 de 1990.

34 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil; Magistrado Ponente: Dr. Jorge Santos Ballesteros; Bogotá. D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dos (2002). Ref. Expediente No. 6660

**La presunción de la sociedad patrimonial:** El artículo 2° de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1 de la Ley 979 del 2005, establece que:

*“Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista Unión Marital de Hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; b) Cuando exista una Unión Marital de Hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inicio la Unión Marital de Hecho. (...).”*

La razón de la norma es crear la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y facilitar la prueba de su existencia mediante el reconocimiento del fenómeno de la presunción. “Se define la presunción como el razonamiento mediante el cual de ciertos antecedentes, circunstancias o hechos conocidos, se deduce o presume la existencia de un hecho desconocido”<sup>35</sup>.

Como se desprende de la norma, dos son los elementos exigidos por el artículo 2° de la Ley 54 de 1990 para la configuración de la presunción de existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes:

---

35 BOLAÑOS O., Ildemar. Unión Marital de Hecho. Bogotá, editorial Leyer, 2006. Pág. 84

a. Formación de la Unión Marital entre compañeros permanentes.

b. Lapso no inferior a dos años de existencia de la Unión Marital.

Los compañeros permanentes podrán declarar la existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes medios:

1. Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante Notario donde dé fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la Unión Marital y los demás presupuestos que se prevén en el artículo 2º de la Ley 54 de 1990.

2. Por manifestación expresa mediante acta suscrita en un Centro de Conciliación legalmente reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos en el artículo 2º de la Ley 54 de 1990.

Demostrada la existencia de la Unión Marital en forma permanente, se entiende probada la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, tal como lo establece el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil al disponer: *“Las presunciones establecidas por la Ley serán procedentes, siempre que los dichos en que se fundan estén debidamente probados”*.

Los pronunciamientos de la Corte frente a este aspecto han sido reiterativos en afirmar que el artículo citado establece una presunción legal de carácter supletivo, que no podrá ser aplicada a uniones conformadas antes de entrar en vigencia la Ley 54 de 1990: “La Corte tiene claro, en lo relativo a la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, que la Ley 54 de 1990 es supletiva. De un lado, ella sienta, en su artículo 2º , una simple presunción legal que es por su naturaleza

desvirtuable y admite, por tanto, convenios que no riñan con la finalidad de la institución, ni con los derechos mínimos que ella reconoce a quienes son compañeros permanentes; y, de otro, el artículo 7° remite a normas del Código Civil para liquidar la sociedad patrimonial por ellos formada, comprendiendo en esa remisión las reglas de las capitulaciones matrimoniales que, bien se sabe, no son otra cosa que “las convenciones” relativas a los bienes y ajustadas por la pareja antes de celebrar el matrimonio. Bien se entiende entonces que de la aplicación de esas reglas puede derivar un régimen de separación de bienes en la sociedad patrimonial de los compañeros permanentes, pues, a semejanza de lo que en ésta ocurre, la sociedad de bienes entre cónyuges también surge de una presunción legal, consistente en la “falta de pacto escrito” en contrario, conforme lo declara el artículo 1774 del Código dicho.”<sup>36</sup>

La sociedad patrimonial se define como “una comunidad patrimonial especial de gananciales, amparada por la Ley para los compañeros permanentes. Como tal, tiene una duración efímera, con un poco de mayor inestabilidad que la sociedad conyugal, que se entiende especial desde su nacimiento hasta su disolución, a la cual generalmente se sigue en estado de indivisión diferente.”<sup>37</sup>

Sobre los elementos señalados, la Doctrina ha afirmado que estos son necesarios para la formación de la sociedad patrimonial y los ha denominado como: formalidad patrimonial y plazo bienal.

---

36 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casación Civil; Magistrado Ponente: Nicolás Bechara Simancas; Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil uno (2001); Ref.: Expediente No. 5947

37 MANRIQUE RAMÍREZ, Gilberto. La Unión Marital de Hecho. Monografía; Bogotá: Universidad Externado de Colombia; Facultad de Derecho. 1995; Pág. 132-139.

a. “Formalidad patrimonial”<sup>38</sup>

Nace precisamente de la convivencia marital y que jurídicamente constituye la vinculación patrimonial representando un elemento de eficiencia.

Para que la sociedad patrimonial surja como tal, es necesario que las partes muestren interés y se encuentren dentro de casos específicos, las condiciones impuestas por el artículo 2° de la Ley 54 de 1990, que le permiten considerarse como una sociedad patrimonial.

b. Plazo Bienal

Este elemento constituye una presunción de tipo legal, que lógicamente admite prueba en contrario (Artículo 66 Código Civil), dándole una seriedad a la Unión Marital que le permite el nacimiento de la sociedad patrimonial. Esa imposición legal no impide a la pareja el contraer matrimonio. La sociedad conyugal nace como fruto del matrimonio, en cambio la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes solo se genera cuando se perfecciona la presunción de los dos (2) años como mínimo de convivencia; de ahí que podamos afirmar: no existe sociedad patrimonial en toda Unión Marital, pero sí se presenta sociedad conyugal en todo matrimonio. Es por ello, que cuando la Ley prescribe el plazo bienal, y que “la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas” (literal b artículo 2 Ley 54 de 1990) busca evitar la concurrencia de sociedades patrimoniales y conyugales.

---

<sup>38</sup> VALLEJO Juan Álvaro, ECHEVERRY Julio César, LEÓN PALACIO Rodrigo; La Unión Marital de Hecho y el Régimen Patrimonial entre compañeros Permanentes; Biblioteca Jurídica Dike; Medellín; 2000; Pág. 105.

Para la conformación de la sociedad patrimonial es necesaria la declaración de existencia de la Unión Marital. A partir de lo que consagra la Ley 54 de 1990 la Jurisprudencia de la Corte Constitucional es enfática en establecer que se exige un plazo de dos años contados a partir del momento en que se inicia la Unión Marital, a fin de que se configure la sociedad patrimonial. A este elemento se añade que si ambos o uno de los compañeros permanentes estuvo casado y existió sociedad conyugal, debe haber existido un año de su disolución y liquidación para que se pueda formar la sociedad patrimonial.

En efecto, es suficiente que se compruebe la existencia de una Unión Marital durante un término no inferior a dos años, con la aclaración de que en los casos en que uno o ambos convivientes tengan impedimentos legales para contraer matrimonio, deben haber disuelto y liquidado sus sociedades conyugales anteriores con una anticipación no menor de un año.

El punto central, y que para el presente estudio cobra relevancia práctica, es el relacionado con la disolución de sociedades conyugales anteriores a la conformación de la Unión Marital. Frente a este punto la mencionada corporación ha establecido:

*“En el segundo caso es obvio que, tal como lo señala el demandante, se autoriza que personas que tienen aún vigente un vínculo matrimonial puedan conformar uniones de hecho y, por lo tanto, sociedades patrimoniales. Indudablemente, el legislador decidió que también se presumía la existencia de una sociedad patrimonial en estos casos, quizás con base en el conocimiento de que muchas*



*uniones de hecho son conformadas por personas que estuvieron casadas con anterioridad y no han disuelto ese vínculo, y a partir de la convicción de que esas situaciones también deben ser abarcadas por el derecho con el objeto de regular los conflictos que de ellas pueden derivarse. Con todo, importa precisar que el mismo Legislador determinó que en estos eventos se exigiría que la persona afectada por el impedimento legal para contraer matrimonio hubiere disuelto y liquidado la respectiva sociedad conyugal, por lo menos un año antes de formar la unión de hecho”.*

Frente al punto de las sociedades conyugales existentes antes de conformarse la sociedad de hecho y la necesidad que estas, además de disueltas se encuentren liquidadas, se pronunció igualmente la Corte Suprema de Justicia. Para que la mencionada sociedad patrimonial, producto de la Unión Marital de Hecho pueda conformarse y nacer a la vida jurídica, en caso de existir sociedad conyugal anterior producto de un vínculo matrimonial, esta además de disuelta deberá estar debidamente liquidada.

*“(…) y para centrar sin tardanza el análisis que es menester, es muy de notar que la Ley preceptuó, como requisito indeficiente, que los compañeros no estén casados. Hay que entender que dicha locución, se refiere a que no estén “casados” entre, sí: pues de estarlo, sus relaciones tanto personales como económicas serían las dimanantes del matrimonio”; aserto que definitivamente, lo apuntala la consideración de que si el casamiento es con terceras personas, no es impedimento para la unión,’ ni para la sociedad patrimonial con apenas cumplir la condición consagrada en el segundo artículo de la misma*

*Ley o sea, que la sociedad conyugal” esté no solamente disuelta sino liquidada. De intento se quisieron traer hasta este punto todas las cosas que referidas quedan, desde luego que es respecto de la última de las sobredichas exigencias que gravita la especie de esta litis. Por cierto, el tema alude a que estando de por medio una sociedad conyugal, la Ley dice que no puede surgir la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes si ya no es que aquella está, además de disuelta liquidada. Y en el caso de ahora, disuelta estaba por el hecho de la muerte de uno de los cónyuges, mas pendiendo su liquidación.” (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil; Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Velásquez; Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil tres (2003); Referencia: Expediente 7603).*

La mencionada sentencia resalta un punto de vital importancia, el cual tiene relación directa con el caso de las personas viudas, que sin haber liquidado la sociedad conyugal fruto de un vínculo matrimonial que fue disuelto por la muerte, años después conformaron Unión Marital, por un lapso superior a dos años. La corporación expresó:

*“Parece ser el momento propicio para puntualizar que, con arreglo a lo dicho, no es cierto que las viudas, por el hecho de tales, fueron exceptuadas por la Ley y que frente a ellos no cabe exigir la liquidación de la ‘sociedad conyugal.(...) Y son descuidadas porque de primera intención pareciera que la liquidación de la sociedad conyugal sólo se exige para quienes, además, tuvieran impedimento para casarse, pues que aquel requisito no “figura sino en la segunda de las hipótesis de la norma. Pero, lo erróneo está en creer que donde no haya impedimento*

*para casarse, no hay que hablar, por sustracción de materia, de sociedad conyugal, suponiéndose equivocadamente que allí no pueden haber sino solteros, y de ahí que el artículo comentado nada dijese sobre liquidaciones en la primera hipótesis; se olvidó que personas hay como los viudos que, sin tener impedimento para casarse, tuvieron sociedad conyugal, disuelta si por causa de la muerte del cónyuge, pero aún sin liquidarse. Lo propio cabe decir frente al caso de nulidad de matrimonio: desaparecido el lazo matrimonial no tienen por este aspecto impedimento para casarse de nuevo, pero pueden cargar y liquidar la sociedad.”*

### **3.3. Unión Marital y vacíos de la Ley 54 de 1990.**

Sin restar importancia al empeño del legislador por incorporar en el sistema legal una institución que se encontraba desprotegida totalmente en el país y por crear un régimen patrimonial justo para ésta, y sin desdibujar el valor jurídico que para nuestra normatividad tiene la Ley 54 de 1990, es de anotar que ésta no logró su cometido plenamente, ya que se quedó corta en el alcance de sus regulaciones y en la integración de todos los aspectos atinentes a la Unión Marital en sí misma y a los demás aspectos patrimoniales derivados de ella.

Compartimos lo expuesto por el doctor Álvaro García: "Mas allá fue la Constitución Política cuando en el artículo 42, que dicho sea de paso, avaló el nacimiento legal de las uniones de hecho, señaló múltiples garantías para las uniones así conformadas, exaltando los principios de igualdad de derechos y deberes entre sus

componentes"<sup>39</sup>.

Los principales asuntos que consideramos que debieron haberse incluido y regulado por la Ley 54 de 1990, obedeciendo a la protección y defensa del derecho de igualdad y a la seguridad jurídica que han sido resueltos en su mayoría por la Jurisprudencia son:

### **3.3.1. Registro de La Unión Marital**

En mi concepto habían dos vías para que la regulación de este tema fuera incluido en la Ley.

La primera de ellas habría sido definir la Unión Marital señalando su naturaleza jurídica como un estado civil, caso en el cual sería obligatorio para todas las autoridades encargadas del registro proceder al mismo, inicialmente en el libro de varios mientras se adelantara una reglamentación especial para hacer una inscripción similar a la del matrimonio.

Por otro lado, pudo haberse optado por ordenar su registro como un acto jurídico, bien en un registro especial o tomándolo como una nota marginal en el registro de nacimiento de cada compañero permanente.

---

39 GARCÍA RESTREPO, Álvaro. Hacia un justo régimen de bins entre compañeros permanentes. Editorial "SEMILLA Y VIENTO". Edición. Medellín, 1994.

Habría sido importante regular este punto en la Ley 54 de 1990, ya que la organización en el registro de esta institución redundaría en economía procesal, porque al encontrarse registrada tal situación no ameritaría demostración judicial de su existencia como requiere hoy.

### **3.3.2. Deberes entre los compañeros permanentes**

La principal función de la Ley 54 de 1990 fue la creación de un régimen patrimonial entre compañeros permanentes, no obstante, al hablar de la Unión Marital bien pudo ocuparse de señalar algunos efectos personales que son fundamentales no sólo para la conformación de una familia sino también como sustento de la relación, tales como: fidelidad, solidaridad, socorro y ayuda mutua etc.

### **3.3.3. Causales de separación**

En materia de Unión Marital no existen causales para que pueda el compañero ofendido reclamar la separación y la consecuente disolución y liquidación de la sociedad patrimonial si ésta ya ha nacido. Aunque la Ley contemple la disolución de la sociedad patrimonial no establece a favor de uno de los compañeros permanentes la posibilidad de obtener forzosamente esta disolución cuando se considere ofendido.

#### **3.3.4. Uniones Maritales con personas incapaces**

La Ley 54 de 1990 no tuvo en cuenta la capacidad, por lo tanto es perfectamente factible que se inicie una convivencia efectiva sin probar capacidad mental o legal y que por tanto en más de una ocasión nos encontremos frente a uniones realizadas por dos personas incapaces o que uno de ellos lo sea. Sin que por esto pueda aplicarse ninguna clase de nulidad a tal hecho.

Tal situación puede solucionarse legalmente, estableciendo un mínimo de capacidad legal y creando la prohibición de unirse con incapaces bajo la consecuencia de no surgir sociedad patrimonial y de tener que indemnizar los perjuicios que se causen al compañero incapaz o su familia.

Si se toma a la Unión Marital como un acto jurídico, la solución sería aun más fácil y efectiva, pues se tendrían en cuenta los requisitos de validez del acto jurídico, y por lo tanto resultaría nula la Unión Marital en la que ambos o al menos uno de los compañeros permanentes fueran incapaces.

#### **3.3.5. Competencia Territorial**

Si bien es cierto que el texto de la Ley 54 de 1990 señaló la jurisdicción a la que le correspondía definir estos conflictos, se olvidó en materia territorial definir cuál de los jueces de familia sería el competente. Por tal razón debe señalarse como juez

competente el de familia del domicilio común de los compañeros permanentes, si el demandante lo conserva o en su defecto el domicilio del demandado.

## **CAPÍTULO 4.**

### **UNIÓN MARITAL PRECISIÓN TEMÁTICA Y CONCEPTUAL**

#### **4.1. Antecedentes de La Unión Marital.**

##### **4.1.1. Antecedentes Sociales**

Desde comienzos de la historia la Unión Marital ha tenido enemigos como la iglesia católica, gobernantes, juristas, etc.; que basándose en la buena moral y en los principios cristianos han obstaculizado la posibilidad del reconocimiento de una familia por la unión de un hombre y una mujer sin el requerimiento del contrato matrimonial.

A pesar de ser discriminada la opción que tiene un hombre y una mujer de unirse por la sola manifestación de su voluntad de conformar una familia; no ha sido esta una razón para abolir tal práctica, por el contrario ha ganado varias batallas a los ataques de quienes defienden obstinadamente la institución del matrimonio. A estas relaciones se les ha repudiado, tratándolas de forma denigrante en la era cristiana, por esto han merecido denominaciones tales como "amancebamiento", "dañado y punible ayuntamiento", "concubinato", situaciones que han sido transmitidos de generación en generación, violando con ello los principios de igualdad de la familia que nace por la sola unión de voluntades.



Las Uniones Maritales han tenido muchísimos choques con la comunidad debido a la desaprobación social de esta conducta, convirtiéndose de este modo en una dificultad para la persona que tomo esta opción y en algunas veces también para su descendencia ya que en la mayoría de casos se cobra una especie de venganza desde todos los ámbitos que los rodean convirtiéndolos en víctimas de su elección, manifestándoles su desaprobación en aspectos como la religión, la educación, el trabajo, y en otros ámbitos de la vida social. No obstante, en vez de presentarse una disminución en esta forma de familia, su práctica se ha vuelto reiterada restando importancia a los prejuicios sociales, a los ataques moralistas, y por el contrario día a día aumentan las personas que optan por ella, y afortunadamente parece ser que la situación se ha tornado más benéfica para las familias que surgen de forma natural, ganándose un espacio y el respeto como algo normal e inherente a la personalidad.

La familia legítima, civil o religiosa surgió con la búsqueda de los hombres para obtener una estabilidad emocional y económica, esto forzó a que a la familia se le diera una identidad donde interactuaran un círculo de deberes y de derechos; pero es de conocimiento general que antes de dicho surgimiento ya existía la familia formada por vínculos naturales.

A la familia surgida del matrimonio suele concedérsele una condición superior con respecto de la familia consensual, esta condición tiene un gran arraigo social y ha producido discriminación entre las personas por razón de su origen; en nuestro medio, no obstante que la familia consensual y la familia matrimonial tienen un rango de equiparación de derechos por parte de la norma superior, formalmente no ha sido posible tal equiparación social entre estas dos instituciones, ya que hay puntos de referencia distintos, difícilmente asimilables, como el hecho de que la

familia surgida del matrimonio tiene un origen en principio conocido y cierto; mientras que la familia consensual carece de este punto. El régimen patrimonial es definido para la familia formada por vínculos legítimos y no lo es para la familia formada por vínculos naturales, en el sentido que en el primer evento se tiene derecho a formar parte de una sociedad conyugal desde el mismo momento del matrimonio, mientras que para la familia formada por vínculos naturales es necesario una convivencia mínima de dos años para que se forme sociedad patrimonial de hecho.

#### **4.1.2. Antecedentes Legales**

El cambio social en cuanto a la forma de constitución de la familia ha tenido un camino difícil, la legislación no ha cumplido su función social como fuente reguladora de conflictos y emanadora de justicia, igualdad y equidad. En el transcurrir histórico el Congreso de Colombia mantuvo abandonada la tarea de legislar en relación a las Uniones Maritales. A principios de siglo en Colombia el concubinato era repudiado socialmente, en especial por la iglesia católica y era ignorado por el derecho; la concubina (en especial) era repudiada socialmente, pero desde las primeras épocas del siglo XX, se comenzaron a expedir normas que reconocieron algunos derechos.

La promulgación de una normatividad incompleta ante las situaciones generadas por la Unión Marital demuestra que nuestra legislación ha avanzado lentamente frente a este tema. Ha transcurrido más de un siglo desde la expedición del Código Civil hasta la expedición de la Ley 54 de 1990; siglo en el cual la legislación fue la gran ausente en materia de regulación de las relaciones surgidas entre

compañeros permanentes, dándole la espalda a los hechos, manifestándose temerosa ante la toma de decisiones en estos ámbitos, y sólo en la década de los noventa el legislador tomo valor para expedir la Ley 54 de 1990 tras duros debates que duraron aproximadamente dos años en Cámara y Senado.

Anterior a esta Ley la legislación colombiana comenzó a dejar a un lado tanta indiferencia legal y fue en materia laboral donde se expidieron las normas que le concedieron los primeros derechos a la mujer concubina.

Entre las escasas normas que han dado un toque de igualdad, equidad y justicia a la familia surgida por el acto de la libre manifestación de la voluntad de convivencia entre un hombre y una mujer, tenemos la Ley 45 de 1936 que consagró un concepto amplio de concubinato en su artículo 4 *"(...) hay concubinato cuando los presuntos padres han tenido relaciones sexuales estables, de manera notoria aunque no hayan vivido bajo el mismo techo, y no puedan contraer entre sí matrimonio legítimo (...)"*

Esta misma Ley se refiere a las relaciones establecidas entre hombres y mujeres casados con personas diferentes a sus cónyuges o entre quienes tenían algún vínculo de parentesco, para darles el calificativo de ayuntamientos dañados y punibles.

La mencionada Ley 45 no aceptó reconocimiento a los efectos jurídicos, personales o patrimoniales, surgidos por estas relaciones.

En el artículo 55 de la Ley 90 de 1941 se le reconoce el seguro obligatorio de riesgos profesionales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en ausencia de la viuda, a la mujer con quien el asegurado haya hecho vida marital en los años inmediatamente anteriores a su fallecimiento, o con la pareja que haya tenido hijos, siempre que ambos hubieran permanecidos solteros durante el concubinato.

La Ley 90 de 1946, fue un gran avance en materia de derechos de los compañeros permanentes, a pesar de que la década del 90 fue de gran arraigo en cuanto a las costumbres basadas en el matrimonio, esta Ley marca un paso relevante hacia las condiciones de igualdad, al consagrar el derecho de pensión de invalidez o muerte a favor de la concubina en ausencia de la viuda, siempre que se demuestre que la mujer había hecho vida marital durante tres años inmediatamente anteriores a la muerte del trabajador.

El Decreto 1848 de 1948, en su artículo 42, ordena que la entidad de previsión social a la cual este afiliado el empleado oficial suministre asistencia médica por maternidad a la esposa o compañera permanente del afiliado, lo mismo que la asistencia pediátrica a los hijos de estos, hasta los seis meses de edad mediante el pago de tarifas económicas especiales, sin importar que el concubinato sea perfecto o imperfecto.

Posteriormente el Decreto 2623 de 1950, reconoce a la mujer soltera, no viuda, que hubiese sido inscrita como compañera y hubiese tenido vida marital con el asegurado por lo menos los tres años anteriores al fallecimiento o hubiese tenido hijos reconocidos.

El Decreto 2690 de 1960 le otorga a la mujer con quién está haciendo vida marital bajo el mismo techo del trabajador, la atención médico obstétrica, siempre que hayan permanecido solteros durante la vida marital.

El Decreto 1848 de 1969 le concede a la compañera permanente del afiliado, asistencia médica por maternidad y a sus hijos hasta que estos cumplan seis meses de edad.

El Acuerdo 536 del 20 de Mayo de 1974 emanado del I.S.S. reconoce a la mujer con quien el asegurado haga vida marital, el derecho a las prestaciones asistenciales en caso de maternidad.

Ley 12 de 1975, creó una pensión especial para sobrevivientes consistente en reconocer a la cónyuge o a la compañera permanente la pensión del trabajador que teniendo derecho a ésta prestación fallezca antes de cumplir la edad requerida por Ley; el legislador extendió a la compañera permanente la protección antes restringida a la viuda en la Ley 33 del 73, y puso al cónyuge legítimo y a la compañera permanente en un mismo plano de igualdad respecto a la pensión de jubilación, pero en orden de preferencia excluyente, de manera que a falta de la cónyuge, la compañera pasara a ocupar su lugar, aún se sigue discriminando la familia que no se constituye a través del vínculo contractual.

Las Leyes 12 de 1976 y 113 de 1985, reconocieron a las concubinos o compañeros

permanentes del trabajador derechos a la pensión de jubilación del trabajador fallecido; la Ley 113 extendió a la compañera permanente el derecho a la sustitución pensional por muerte del trabajador pensionado con derecho a jubilación.

Para reconocer los derechos que tenían los compañeros permanentes se retardó la legislación muchos años, sin embargo fue ágil para expedir conceptos sancionatorios, pues desde 1890 consagró en el código penal los delitos de adulterio, incesto y amancebamiento, pues se tenía que defender a toda costa las buenas costumbres y el orden social.

#### **4.1.3. Antecedentes Jurisprudenciales y Doctrinales**

Ante la inoperancia de la Ley, fue preciso sentar bases Jurisprudenciales y Doctrinales para proteger los derechos de las personas unidas entre sí por la manifestación de su voluntad. Dando lugar a que frente a una misma situación de hecho, se presentaran distintas soluciones en derecho, ya que las pretensiones se dejaban en manos del aplicador jurídico, quién en muchas oportunidades no hacía una interpretación sistemática y equitativa ante los vacíos al respecto. Fue así como en muchos casos se presentaron mayores injusticias al acudir al órgano judicial, puesto que unas veces se reconocían y otras se negaban los derechos, de acuerdo al criterio del aplicador jurídico.

Ante tal vacío legal, se presentaron en nuestra sociedad multiplicidad de eventos

en los cuales se defraudaba al compañero permanente. Por ello, la Jurisprudencia con base en primer lugar, en la teoría del enriquecimiento sin causa, y más tarde en la de la sociedad de hecho, y en la relación laboral, ofrecieron su apoyo a esta institución, en ese entonces débil, en la cual se presentaba la creación de un patrimonio común, pero las dificultades probatorias y la complejidad de los procedimientos para su reconocimiento, limitaban notoriamente la eficacia de los instrumentos con que podía contar para su defensa pues se encuentra el problema de tener que llevar sus pretensiones hasta la etapa de casación, dado que en la primera y segunda instancia eran pocas las probabilidades de lograr sus pretensiones.

**El enriquecimiento sin causa:** la Jurisprudencia y la Doctrina utilizaron esta figura para los casos en los que el perjudicado no disponía de otra acción y se daban los presupuestos para ello *"enriquecimiento de una persona en relación directa con el empobrecimiento de otra, cuando el desequilibrio de los patrimonios no está justificado por una razón jurídica. La persona empobrecida puede ejercer la acción in rem verso"*<sup>40</sup>.

Para que se de esta figura es necesario que entre el enriquecimiento de uno y el empobrecimiento del otro exista relación y que dicha relación no tenga causa que la justifique.

**Existencia de una sociedad de hecho:** esta tesis se baso en la definición del Código Civil de una sociedad o compañía, *"un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación."*<sup>41</sup>

---

40 Ibidem.

Asumiendo que en ésta clase de sociedad surge el "animo societatis", la voluntad de trabajar en sociedad y el aporte de los socios para la consecución de un fin; por ello podía predicarse que allí se daba tal forma económica que encaja en la definición de la norma civil sobre la sociedad de hecho.

**El reconocimiento de una relación laboral:** otra herramienta para los compañeros permanentes era la utilización del artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo, que define el contrato de trabajo, *“aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda mediante remuneración”*. Tal solución debía afrontarse ante la jurisdicción laboral y en varias ocasiones evitó que se cometieran injusticias ante el trabajo que aportaba uno de los compañeros permanentes. En tal sentido se pronunció el Tribunal Supremo del Trabajo en sentencia que declara la existencia de una relación laboral entre concubinos<sup>42</sup>.

## **4.2. Delimitación Del Concepto y Requisitos de La Unión Marital de Hecho.**

### **4.2.1. Definición.**

La Corte Suprema de Justicia generalmente ha sostenido, por mayoría, la “Unión Marital de Hecho”, definida por la Ley 54 de 1990, como la *“formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una vida permanente y*

---

<sup>41</sup> Ibidem.

<sup>42</sup> BENAVIDES PATRÓN, Juan. Tribunal Supremo del trabajo. Bogotá, 1949.



*singular*”, que de acuerdo a reciente pronunciamiento de la sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia es una especie de estado civil.

#### **4.2.2. Precisión temática y conceptual**

En un medio como el nuestro tan arraigado a los valores, costumbres y tradiciones religiosas, se hace cada vez más notoria la determinación de muchas parejas de formar no un vínculo sacramental sino uno formal, ya unas veces su situación legal no se lo permite debido a la unión matrimonial primigenia que no ha sido disuelta y liquidada (matrimonio civil), o anulada (matrimonio canónico), o bien porque no han tramitado y obtenido la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso u obtenido el divorcio, por lo cual optan por la nueva unión sin más rigorismo que su propia voluntad.

Para ello basta con revisar los registros oficiales del Departamento Nacional de Estadística DANE en el censo de 2005, en relación con la población total colombiana de 41'242.948 habitantes, de los cuales el 48.6% son hombres y el 51.4% mujeres.<sup>43</sup>, donde el 22. 3% de parejas conviven en unión libre, frente al 23.8% de parejas casadas por el vínculo matrimonial y rito civil<sup>44</sup>. Esta realidad refleja la manera como socialmente está consolidada la unión de personas sin vínculo legal matrimonial, de donde resulta de singular importancia la figura jurídica de las capitulaciones maritales y patrimoniales, como un instrumento válido o mecanismo de orden legal que brinde protección a la pareja que convive.

---

<sup>43</sup> Fuente Departamento Nacional de Estadística DANE Censo 2005.

<sup>44</sup> Departamento Nacional de Estadística DANE Censo 2005

La Ley 54 de 1990 define las Uniones Maritales y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes, como aquella sociedad formada por los hechos, que aunque conserva los elementos generales del contrato típico, pero ausentes en una escritura pública, la Ley sólo le da el tratamiento de sociedad de hecho.

Dicha Ley, por la ausencia del contrato matrimonial, desde un enfoque estrictamente económico, conduce a la presunción de una sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes, siempre que se reúnan los requisitos fijados en sus artículos 1º y 2º. Vale la pena destacar, que estos últimos son diferentes de los requisitos generales y específicos que había usado la Doctrina y la Jurisprudencia para configurar la sociedad de hecho entre concubinos. Esta Ley crea una nueva sociedad patrimonial, pero no excluyente de otras sociedades de hecho, cuya fuente no sea el mismo texto legal, sino las normas civiles o comerciales.

Es imperioso señalar, en todo caso, que las relaciones afectivas de convivencia sólo se estructuran bajo los calificativos de naturaleza, intimidad y continuidad. Vale decir que no por mantener una relación amorosa durante varios años, se pueda confundir ese simple hecho, con las condiciones y razones de la convivencia definitiva y permanente de la pareja. Solamente en el momento en que la pareja dentro de su autonomía decide convivir y su relación se manifiesta con actos frecuentes de intimidad, cercanía, afecto, pasando de una relación de “noviazgo” al de una formal relación carnal, es que empiezan a surgir efectos legales.

Ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación del 12 de mayo de 1990, que para que una relación de pareja se estructure socialmente como tal, debe tratarse inequívocamente de *“hechos por su propia índole, tangibles y perceptibles por los sentidos, reiterados y no esporádicos o momentáneos, fuertes y persuasivos, denotadores de lazos de especial confianza, apego, adhesión y familiaridad, que pongan en evidencia que no han podido sino desembocar, por el mismo grado de causalidad que ofrecen, en el acceso carnal, porque precisamente son las que de ordinario anteceden a una unión semejante”*.

Vía de Doctrina se sostuvo que la única forma de probar la Unión Marital era la sentencia judicial que así lo declarara. Sin embargo, actualmente las partes pueden reconocer, la existencia de la Unión Marital y la sociedad patrimonial que conforman los compañeros permanentes, mediante las aseveraciones y manifestaciones que hagan a través de escritura pública, en la que por demás podrá también declarar la disolución y liquidación, en desarrollo de la las Leyes 979 de 2005 y 962 del 26 de 2005.

En desarrollo de las facultades de jurisdicción voluntarias asignadas a los Notarios o a la función fedataria, a través de la Ley 962 de julio 8 de 2005 en su capítulo IV, la Ley 979 del 26 julio de 2005<sup>45</sup> que modificó parcialmente la Ley 54 de 1990, se

---

45 **Ley 979 de 2005, Artículo 1°.** El artículo 2° de la Ley 54 de 1990, quedará así:

Artículo 2°. Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando exista Unión Marital de Hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio;

b) Cuando exista una Unión Marital de Hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la Unión Marital de Hecho.

Los compañeros permanentes que se encuentren en alguno de los casos anteriores podrán declarar la existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes medios:

1. Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante Notario donde dé fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la Unión Marital de Hecho y los demás presupuestos que se prevén en los literales a) y b) del

establecieron unos mecanismos ágiles para demostrar la Unión Marital y sus efectos patrimoniales entre compañeros permanentes, permitiendo que su presunción se declare o tramite ante Notario. En tal sentido su artículo 1º presume que ha surgido o existe sociedad patrimonial entre compañeros permanentes en los siguientes casos:

a) Cuando exista Unión Marital de Hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio;

b) Cuando exista una Unión Marital de Hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de

---

presente artículo.

2. Por manifestación expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliación legalmente reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos en los literales a) y b) de este artículo.

**Artículo 2º.** El artículo 4º de la Ley 54 de 1990, quedará así:

Artículo 4º. La existencia de la Unión Marital de Hecho entre compañeros permanentes, se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos:

1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes.
2. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido.
3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento

Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera Instancia.

**Artículo 3º.** El artículo 5º de la Ley 54 de 1990, quedará así:

Artículo 5º. La sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se disuelve por los siguientes hechos:

1. Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a Escritura Pública ante Notario.
2. De común acuerdo entre compañeros permanentes, mediante acta suscrita ante un Centro de Conciliación

legalmente reconocido.

3. Por Sentencia Judicial.

4. Por la muerte de uno o ambos compañeros.

**Artículo 4º.** El artículo 6º de la Ley 54 de 1990, quedará así:

Artículo 6º. Cualquiera de los compañeros permanentes o sus herederos podrán pedir la declaración, disolución y liquidación de la Sociedad Patrimonial y la adjudicación de los bienes.

Cuando la causa de la disolución y liquidación de la Sociedad Patrimonial sea, la muerte de uno o ambos compañeros permanentes, la liquidación podrá hacerse dentro del respectivo proceso de sucesión, siempre y cuando previamente se haya logrado su declaración conforme a lo dispuesto en la presente ley.

**Artículo 5º.** La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la Unión Marital de Hecho.

Ahora bien, partiendo de la consagración legal anterior, en desarrollo del artículo 2º de la Ley 979 de 2005 que modificó el artículo 4º de la Ley 54 de 1990, quienes como compañeros permanentes se encuentren en uno de los casos indicados, podrán declarar la existencia de sociedad patrimonial, por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante Notario, donde se de fe de la existencia de tal sociedad y acrediten los interesados la Unión Marital.

En virtud de la ultima disposición referida, también pueden los compañeros permanentes declarar la existencia de la sociedad patrimonial, por manifestación expresa ante un centro de conciliación debidamente reconocido por el Ministerio del Interior y de Justicia, donde suscriban acta en la que se demuestren el cumplimiento de los requisitos previstos en los literales a) y b) del artículo 1º de la Ley 979 del 26 julio de 2005. Debe destacarse, que de conformidad con la Ley 640 de 2001 y el Decreto 2771 de 2001, tratándose de la Declaración de la Unión Marital, la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial (entre otros asuntos), la conciliación es requisito de procedibilidad, previa, a la iniciación de un proceso judicial.

En síntesis, aunque la Doctrina durante un periodo representativo sostuvo que la única forma de probar la Unión Marital era la sentencia judicial que así lo declarara, actualmente las partes pueden reconocer, la existencia de la Unión Marital y la sociedad patrimonial que conforman los compañeros permanentes,

mediante las manifestaciones y declaraciones que hagan a través de escritura pública en que se hace, además, la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, autorizados por el literal c) del artículo 5º de la Ley 54 de 1990, Ley 640 de 2001, el Decreto 2771 de 2001, y en desarrollo de la las Leyes 979 de 2005 y 962 de 2005.

#### **4.3. Alcance de los Requisitos de La Unión Marital.**

Para que la situación en común que desarrollan muchas parejas al margen del matrimonio pueda producir efectos jurídicos es necesario que se cumplan ciertos requisitos, de modo que ese pueda considerar que se trata de una verdadera convivencia marital, en cuyo caso debe ser tenida en cuenta por el Derecho.

Resulta fundamental, en primer lugar, delimitar qué tipo de relaciones pueden calificarse como Uniones Maritales. Si con esta expresión nos referimos a cualquier tipo de relación extramatrimonial, o, si por el contrario, sólo se incluyen aquéllas relaciones que cumplan ciertos requisitos imprescindibles, para el reconocimiento de los efectos jurídicos de su unión.

La comunidad de vida que se forma mediante la existencia de la Unión Marital es conformada por una pareja que se caracteriza por su continuidad y permanencia con el fin último de crear una familia. La Doctrinante española Carolina Mesa Marrero define en forma precisa la “Unión Marital de Hecho” como: “(...) la relación efectiva de una pareja con independencia de su sexualidad, que comparte un proyecto de vida en común, con intención de permanencia y que, sin ningún tipo

de formalidad en su constitución, desarrollan la convivencia en el mismo hogar de forma semejante a la conyugal”<sup>46</sup>.

En este sentido, se desprende la necesidad de que la Unión Marital ha de cumplir ciertos requisitos para que las consecuencias personales y patrimoniales que derivan de este modo de convivencia tengan relevancia jurídica. Es necesario, por lo tanto, profundizar en el estudio de cada uno de los elementos que deben estar presentes en la relación extramatrimonial, para poder calificarla como una verdadera Unión Marital merecedora de tutela jurídica.

De acuerdo con la Ley 54 de 1990, son requisitos fundamentales para la estructuración de la Unión Marital: 1) la diversidad de sexos entre los miembros de la pareja; 2) que no sean casados entre sí y 3) que exista comunidad de vida con las características de permanente y singular. 4) También se exige una duración mínima de dos años y 5) no deben existir impedimentos para contraer matrimonio, y si alguno o ambos lo tienen, *“que la sociedad o sociedades anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la Unión Marital de Hecho”*. A partir de los anteriores requisitos, resulta fácil deducir que el legislador no tuvo en mente dar cabida a la coexistencia de sociedades patrimoniales nacidas de la Unión Marital, ni la concurrencia entre la sociedad patrimonial como consecuencia de la sociedad conyugal y la patrimonial entre compañeros permanentes.

---

<sup>46</sup>MESA MARRERO, Carolina. Las uniones de hecho. Análisis de las relaciones económicas y sus efectos. Navarra, Editorial Aranzadi, 2006. 2 ed. Pág. 46.

A continuación se analiza cada uno de los requisitos contemplados en la Ley 54 de 1990, así:

#### **4.3.1. Heterosexualidad o Diversidad de sexos.**

De conformidad con el artículo 1º quienes pretendan conformar una Unión Marital necesariamente han de ser personas de diferente sexo, es decir, un hombre y una mujer, porque la citada Ley solo regula las uniones de hecho de parejas de distinto sexo o heterosexuales.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que a partir de febrero del 2007, la figura de la Unión Marital se extiende a la pareja homosexual.

#### **4.3.2. Singularidad de los Extremos.**

Esta característica es de particular relevancia, y se pone de presente en la misma definición, cuando se expresa de manera perentoria que la Unión Marital solo es legalmente posible mediante la unión de “un hombre” y “una mujer”, lo que está descartando que puedan surgir uniones entre un hombre y varias mujeres, o, viceversa, y entre varios hombres y una mujer.

La singularidad en la Unión Marital comprende el aspecto objetivo de la relación ya que es la representación de la unión como tal. Dicho esto, la singularidad se presenta como uno de los elementos de mayor controversia debido a que la exclusividad entre compañeros comporta un elemento vital para configurar la



Unión Marital. Esto se debe a que las circunstancias bajo las cuales se inician y desarrollan este tipo de relaciones pueden ser consideradas controversiales e inadecuadas respecto a la tipología propia de la figura. No es desconocido, que al inicio de las relaciones de hecho se presente simultaneidad entre estas y otras conyugales. Situación que puede ser vista como un vicio para entablar una verdadera relación marital.

Según la Ley 54 de 1990, para que haya lugar a declarar la existencia de una “Unión Marital de Hecho”, la relación marital debe ser singular y permanente. Debe ser única, pues sólo puede establecerse entre un hombre y una mujer, a lo que precisamente se refiere el término “singular”. Cuando un hombre o una mujer aparecen manteniendo una relación marital con otra mujer u otro hombre, según el caso, desaparece el concepto mencionado y se presenta una relación promiscua. Así, la Corte Suprema se ha pronunciado al respecto en los siguientes términos: “De suerte que conforme al Artículo 1º. De la Ley 54 de 1990 no es posible reconocer que entre la demandante y el causante existió una Unión Marital de Hecho, porque no obstante haberse demostrado que sin estar casados, siendo ambos solteros, formaron una comunidad de vida permanente durante más de cuarenta años que perduró hasta el fallecimiento de aquél, no se presentó la singularidad que exige la Ley ya que éste mantenía otra relación similar con otra dama diferente a la actora”<sup>47</sup>.

Si bien el criterio anteriormente planteado ha tenido gran acogida en la Corte, el mismo no es ajeno a argumentos controversiales, los cuales han sido esgrimidos por la misma Sala. Encontramos entonces que en sentencia del 12 de febrero de 2003 (expediente 7465), la Corte determina que la existencia de relaciones de

---

<sup>47</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de noviembre 16 de 2001, Expediente No. 6655. Magistrado Ponente Dr. Manuel Ardila Velásquez.

carácter esporádico o eventuales, no representan obstáculo alguno para que se constituya efectivamente la Unión Marital. Por lo tanto no pueden equipararse el concepto de compañera permanente con el de “amiga permanente”, ya que el hecho de que la fidelidad sexual se vea comprometida dentro de una relación no implica que la constitución de la Unión Marital se vea amenazada. Y en propias palabras de la Sala *“(…) a la verdad, en el fallo no se sostuvo ni con mucho que la Unión Marital se configura o se equipara con una simple amistad permanente, como tampoco que su subsistencia queda trunca cuando alguno de sus miembros ha tenido relaciones sexuales con una tercera persona.”*

En su verdadero sentir, la Corte no reformula sus propios criterios sostenidos en Jurisprudencia anterior. Acoge la misma tesis de la singularidad como requisito esencial en la Unión Marital, aclarando que lo que resulta inadmisibile es la simultaneidad de relaciones equiparables, en sus aspectos objetivos y por ello en la sentencia reseñada anteriormente, utiliza el término “amiga permanente” para concluir que las relaciones esporádicas por ese solo hecho no destruyen una relación marital ya conformada. No huelgan por lo tanto, las dos decisiones analizadas; por el contrario, la segunda es complementaria de la primera.

#### **4.3.3. Los compañeros permanentes no pueden estar casados.**

Se refiere esta situación, a que los compañeros no estén casados entre sí o no estén casados con personas distintas del otro compañero. Al respecto la Corte Suprema aclaró: “Dentro de ese contexto brota evidente que el legislador enterado de que muchas son las uniones de hecho que se integran con personas que son o han sido casadas con terceros, previó que no concurrieran dos sociedades

patrimoniales, la conyugal que se conformó por razón del matrimonio anterior y la patrimonial entre compañeros permanentes; igualmente previó que si uno de los compañeros permanentes contrae matrimonio con persona distinta, se disuelve la sociedad marital patrimonial precedente. En ese orden de ideas, resulta perfectamente admisible, lógico y coherente pensar que el legislador no tuvo en mente dar cabida, en cambio, a la coexistencia de sociedades patrimoniales nacidas de la Unión Marital de Hecho, tesis esta por la que propugna el censor. No es cierto, como dice éste, que si el legislador acepta que haya Unión Marital de Hecho y matrimonio vigente al mismo tiempo, en donde se involucre uno de los compañeros permanentes o ambos, con mayor razón es dable aceptar la concurrencia de varias Uniones Maritales, pues en realidad para efectos patrimoniales la Ley 54 de 1990 exige justamente la previa disolución y liquidación de la sociedad conyugal, y pasado un año de ésta para concedérselos a la unión de hecho, y esta se extingue si uno de los compañeros permanentes contrae matrimonio.”<sup>48</sup>

Los requisitos definidos por la Corte Suprema guardan armonía con aquellos identificados por la Doctrina. Por ello, vale la pena concluir que estos son diáfanos y claros, y respecto a los mismos no hay mayor discrepancia interpretativa, en especial en cuanto al requisito de la singularidad.

#### **4.3.4. Comunidad de vida.**

---

<sup>48</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia S-166-2000 expediente 6117 de septiembre 20 de 2000 Magistrado Ponente Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno.

La comunidad de vida equivale a llevar una vida en común, vale decir, el cohabitar, y el colaborarse económicamente y personalmente en las distintas circunstancias de la vida. Esto externamente se representa en la comunidad de habitación o residencia.

El artículo 1° de la Ley 54 de 1990 determina que se denomina “Unión Marital de Hecho” la conformada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Esta debe entenderse como una relación de duración firme, constante, con perseverancia y, sobre todo, estable por lo que se excluye la que es meramente pasajera o casual. La comunidad de vida implica compartir la vida misma con el compañero(a) permanente, formando una unidad indisoluble como núcleo familiar y además significa la existencia de lazos afectivos que obliga el cohabitar compartiendo techo. La convivencia bajo un mismo techo es un aspecto indubitable de la Unión Marital, y constituye una expresión física de la voluntad o disposición de los compañeros.

“Este deber implica el vínculo que crea la necesidad de los compañeros permanentes de “vivir juntos” en todas las manifestaciones posibles (v.gr. territorialmente, en la misma ciudad, residencia, habitación; personalmente, en lo físico, psíquico, mental, y en la presencia, pensamiento, etc.; socialmente, en su trato, cultura, trabajo, etc.) a fin de que con su cumplimiento, surja o se facilite la integración comunitaria de la vida, que, a su vez, haga posible el desarrollo de la comunidad de vida marital de hecho.”<sup>49</sup>

---

49 LAFONT PIANETTA, Pedro. Derecho de Familia- Unión Marital de Hecho, Tercera Edición, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, Colombia, 2001. Pág. 159.

La Corte suprema de Justicia resaltó la importancia de la cohabitación en el desarrollo de la comunidad de vida entre compañeros permanentes, al manifestar en sentencia de diciembre 12 de 2001 que “La comunidad de vida, o comunidad vital o consorcio de vida, es pues un concepto que como acaba de apreciarse está integrado por elementos fácticos objetivos como la convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las relaciones sexuales y la permanencia, y subjetivos otros, como el ánimo mutuo de pertenencia, de unidad y la *affectio maritalis*, que unidos además a la descendencia común y a las obligaciones y deberes que de tal hecho se derivan, concretan jurídicamente la noción de familia. Destaca la Corte cómo derivado del ánimo a que se ha hecho referencia, deben surgir de manera indubitable aspectos tales como la convivencia de ordinario bajo un mismo techo, esto es la cohabitación, el compartir lecho y mesa y asumir en forma permanente y estable ese diario quehacer existencial, que por consiguiente implica no una vinculación transitoria o esporádica, sino un proyecto de vida y hogar comunes que, se insiste, no podría darse sin la cohabitación que posibilita que una pareja comparta todos los aspectos y avatares de esa vida en común.”<sup>50</sup>

#### **4.3.5. Permanencia de vida.**

La permanencia hace referencia al factor tiempo. Ello quiere decir, que el hombre y la mujer que llevan una comunidad de vida, “deben haberlo hecho por un tiempo lo suficientemente importante para que se entienda la existencia de la Unión Marital, un espacio de dos años por lo menos.”<sup>51</sup>

---

50 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Expediente No. 6721, diciembre 12 de 2001, Magistrado Ponente Dr. Jorge Santos Ballesteros.

51 SUAREZ FRANCO, Roberto, Derecho de Familia, Tomo I, Séptima Edición, Editorial Temis S.A., Bogotá, Colombia, 1998; Pág. 444-445.

La Jurisprudencia del Tribunal Superior de Bogotá ha definido los puntos anteriores en los siguientes términos: *“Varios elementos de fondo, deben concurrir a la formación de Unión Marital de Hecho: a. La idoneidad marital de los sujetos. Este elemento se refiere a la aptitud de los compañeros para la formación y conservación de la vida marital”,* y exige a la vez:

- Dualidad de seres humanos.
- Capacidad Sexual.
- Legitimación Marital, que es el poder o potestad para conformarla.

Constituye un elemento autónomo, para ello es necesario que exista libertad marital, siendo éste uno de los puntos en los que mayor vacío dejó la Ley 54 de 1990 de 1990, toda vez que no dijo quienes pueden conformar una Unión Marital.

“Comunidad de vida: Esta tiene que ver con la real convivencia, traducido en la cohabitación y en el socorro y ayuda mutuos”.

“Permanencia Marital: No dijo el legislador cuánto tiempo debía perdurar la Unión Marital para que se considere permanente, pero se estima que la necesaria para reflejar una efectiva comunidad de vida, y no menos de dos (2) años para que dé lugar a que se presuma la existencia de sociedad patrimonial”.

“Singularidad marital: Este elemento guarda gran similitud con la unión conyugal la cual tiene que ser única o singular, por cuanto es elemento estructural de la familia el matrimonio monogámico, lo cual indica que no es admisible la coexistencia dentro de un mismo lapso temporal, de otras relaciones maritales fácticas”.<sup>52</sup>

Para el Tribunal Superior de Bogotá se configura Unión Marital una vez reunidos los elementos previamente enunciados, los cuales deben concurrir conjuntamente con el fin de generar efectos jurídicos, es decir para que pueda ser declarada la unión.

#### **4.4. Doctrina y Jurisprudencia.**

##### **4.4.1. La “Unión Marital de Hecho” no crea un estado civil.**

La Corte Suprema de Justicia en su momento considero que la “Unión Marital de Hecho” no era asimilable al estado civil.

En fallo del 28 de noviembre de 2001, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia analizó extensamente dicho tema y expresó lo siguiente:

---

<sup>52</sup> TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ. SALA DE FAMILIA. Bogotá, Agosto 30, 2004. RAD: 3970. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Omar Cuellar Romero.

*“En el ordenamiento jurídico colombiano no se ha establecido constitucional ni legalmente, el estado civil de compañero permanente derivado de la Unión Marital de Hecho. En efecto, no se puede deducir semejante consagración de lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Política, por el hecho de que en él se diga que la familia ‘se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla’, aspecto éste, aquí subrayado, que corresponde a un mero enunciado, huérfano aún de reglamentación legal.*

*De allí que para darle en la materia de que aquí se trata el alcance a tal precepto se requerirá, de conformidad con lo dispuesto en su último inciso, que sea la Ley la que determine lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes’, la cual en verdad con ese carácter no se ha expedido respecto de la situación de la familia constituida por la mera voluntad de conformarla o dimanante de la Unión Marital de Hecho establecida en Ley anterior.”*

Más adelante dice la referida sentencia de la Corte Suprema, Sala Civil:

*“6. En conclusión: si bien la Unión Marital de Hecho y la constitución de la familia por vínculos naturales, a voluntad de la pareja, puede llegar a constituir un estado civil, lo cierto es que todavía no se ha expedido la Ley que haga tal asignación, ni hay norma que permita asimilarlo como tal, (...)*



*“7. Por consiguiente, por ahora no resulta admisible sostener que con la demanda destinada a que se declare la existencia de una sociedad patrimonial presunta entre compañeros permanentes, su disolución y liquidación, se ejerce una acción de estado civil (...)”*

#### **4.4.2. La “Unión Marital De Hecho” es una especie de estado civil.**

Mediante Auto 205 de 2008<sup>53</sup> la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, hizo una importante rectificación Doctrinaria sobre la Unión Marital, al establecer o modificar el estado civil de quienes hacen parte de ella, indicando que la *“Unión Marital de Hecho, al igual que el matrimonio, es una especie de estado civil”*. En sus apartes se expresa:

*“Si bien la Unión Marital de Hecho y la constitución de la familia por vínculos naturales, a voluntad de la pareja, puede llegar a constituir un estado civil, lo cierto es que todavía no se ha expedido la Ley que haga tal asignación, ni hay norma que permita asimilarlo como tal, ni menos se puede deducir por el reconocimiento de derechos legales específicos de distinto orden hasta ahora conferidos a los compañeros permanentes, incluso algunos por vía Jurisprudencial, los cuales, valga decirlo, no se eliminan ni merman por el hecho de no constituir la Unión Marital el estado dicho”.*

---

53 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN. Proceso No. 0500131100062004-00205-01. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar.

*“(...) normativamente se han introducido cambios que tienden a darle a la Unión Marital de Hecho un tratamiento jurídico equiparable o semejante al del matrimonio y a todo lo que gira alrededor de esas situaciones, cuestiones todas que sin lugar a dudas permiten subsumir a aquélla en la definición del artículo 1º del Decreto 1260 de 1970, según el cual el “estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible y su asignación corresponde a la Ley”.*

*“Así, por ejemplo, la Ley 1060 de 2006, mediante la cual se introdujeron importantes reformas al Código Civil, reputa como hijo de los cónyuges o compañeros permanentes, al que es concebido durante el matrimonio o durante la Unión Marital de Hecho o al que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes a la celebración de aquél o a la declaración de ésta. De otra parte, si bien la Unión Marital de Hecho requiere de actos materiales para constituirla, en la hora de ahora no es aceptable que la declaración formal de los compañeros permanentes sea insuficiente para conformarla, porque amén de las “providencias” que la declaran, también tiene sus fuentes en las actas de conciliación y en el mutuo consentimiento de los interesados manifestado ante Notario, como expresamente se consagra en las Leyes 640 de 2001, artículo 40, numeral 3º, y 979 de 2005, artículo 4º, numerales 1º y 2º”.*

En el campo económico, la misma Ley 54 de 1990, bajo ciertas circunstancias, admite la posibilidad de ‘presumir’ la existencia de la sociedad patrimonial entre

compañeros permanentes, al punto que regula los derechos y deberes de ese régimen patrimonial, a semejanza, en términos generales, de la que se origina por el hecho del matrimonio, pues unas de las causales establecidas para disolverla, coinciden con algunas de ésta, inclusive, para su liquidación, remite al régimen de las capitulaciones matrimoniales y de la sociedad conyugal del Código Civil.

“Por esto, la Corte recientemente enseñó que la Ley 54 de 1990, no tenía como único propósito, definir la Unión Marital de Hecho y describir sus elementos, sino que también en ella se estableció que esa conceptualización se hacía ‘para todos los efectos civiles’ (se subraya), lo que significa que, con independencia de cuáles sean en concreto esos efectos (derecho a alimentos, derechos laborales prestacionales, entre otros), es innegable que la norma hace alusión a una relación jurídica específica que genera consecuencias jurídicas determinables para cada uno de los compañeros permanentes<sup>54</sup>”.<sup>55</sup>

Efectivamente, consciente el legislador del inocultable hecho social de la “*familia natural*”, la Ley 54 de 1990, según su titulación lo indica, amén de reconocer el origen de la misma, como es la Unión Marital, tiene como finalidad establecer los derechos y deberes patrimoniales de los “*concubinos*”, para así llenar el vacío

---

54 Los términos “compañero y compañera permanente” comprenden también a parejas homosexuales que conforman una Unión Marital de Hecho. Mediante sentencia c 798 de 2008 la Corte Constitucional modificó el párrafo 1° del artículo 1° de la Ley 1181 de 2007, en el siguiente sentido: La Corte analizó los cargos de inconstitucionalidad planteados contra el párrafo 1° del artículo 1° de la Ley 1181 de 2007, de lo cual concluyó que la precisión que se hace en esta disposición respecto de los compañeros permanentes, para efectos de la tipificación del delito de inasistencia alimentaria, podría entenderse en el sentido que excluye de la protección al miembro más débil de la relación de pareja constituida por parejas del mismo sexo, en la medida que señala que “únicamente” se tendrá por compañero permanente al hombre y a la mujer que forman parte de la Unión Marital de Hecho, interpretación que resultaría contraria a la Constitución porque configuraría una discriminación y el consecuente déficit de protección frente a las parejas homosexuales. Por tal motivo, la Corte retiró del ordenamiento jurídicamente la expresión “únicamente”, que se declaró inexecutable y condicionó la exequibilidad del resto del párrafo 1° a que se entienda que las expresiones “compañero” y “compañera permanente” comprende también a los integrantes de una pareja del mismo sexo que conforman una Unión Marital de Hecho.

55 SENTENCIA 268 de 28 de octubre de 2005, expediente 2000-00591-01.

existente en una materia que interesa al bienestar de la familia y que no puede quedar al margen de la protección del Estado<sup>56</sup>.

*“En esa medida, aunque la citada Ley es anterior a la Constitución Política de 1991, régimen que en su artículo 42 reconoce que la familia puede constituirse ‘por vínculos naturales o jurídicos’, su lectura e interpretación no puede ser extraña a los valores y principios que ese nuevo orden de cosas consagra. Por el contrario, dicha normatividad debe entenderse con una vocación de equidad e igualdad, porque sin duda alguna lo que sus normas procuran es reconocer, como luego lo hizo el precepto superior citado, que la unión libre entre el hombre y la mujer, también ‘corresponde a una de las formas legítimas de constituir una familia’, merecedora, por lo tanto, de protección legal y de aceptación social”.*

#### **4.5.3. Unión Marital de hecho como forma de familia.**

Para hablar de familia se deben reunir ciertos requisitos tales como: a) Que se forme por vínculos naturales o jurídicos; b) Que se exprese un acto volitivo; c) Que exista la unión entre un hombre y una mujer, ya sea matrimonial o mediante actos responsables. Estos requisitos evidencian que tanto el matrimonio como la Unión Marital originan una familia. Al respecto la Corte Constitucional ha indicado:

---

<sup>56</sup> ANALES DEL CONGRESO de 15 de agosto de 1988, número 79.

*“La familia constituida por vínculos naturales, por la voluntad responsable de un hombre y una mujer de conformarla, también es objeto de expreso reconocimiento constitucional que se concreta en su protección integral por parte del Estado y la sociedad. De otro lado, la Constitución ordena que las relaciones de todo orden, entre los miembros de la pareja, se fundamenten en el respeto mutuo y en la igualdad de derechos y deberes (Carta Política Artículo 42 y 43).*

“La Unión Marital de Hecho (...), corresponde a una de las formas legítimas de constituir la familia, la que no se crea sólo en virtud del matrimonio. La unión libre de hombre y mujer, <aunque no tengan entre sí vínculos de sangre ni contractuales formales>, debe ser objeto de protección del Estado y la sociedad, pues ella da origen a la institución familiar”. <sup>57</sup>

#### **4.5.4. Unión de hecho.**

La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, fue la encargada de comenzar el proceso de hacer justicia en el caso de las uniones libres, en favor de la mujer, generalmente la parte más débil de la relación, en razón de factores económicos y culturales, es decir, sociales en general. La corriente renovadora de la Jurisprudencia, fue una de las consecuencias de las profundas transformaciones legislativas de los años treinta, en lo que tiene que ver con la mujer casada, iniciadas con la Ley 28 de 1932. Era natural que las Leyes que elevaban la

---

<sup>57</sup> CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-098 de 1996, Magistrado Ponente Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.

condición de la mujer casada y de los hijos naturales, movieran a los jueces en defensa de la concubina, en un país donde aproximadamente la mitad de las uniones se dan por vínculos naturales.

La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia había reconocido una eventual sociedad de hecho, siempre y cuando se demostraran los elementos esenciales de toda sociedad, es decir, el ánimo de asociarse, la conformación de un fondo común y el reparto de utilidades. Igualmente, algunas Leyes en materia laboral habían reconocido algún derecho a los concubinos. Así se construyó la teoría de la sociedad de hecho entre concubinos, teoría que representó un segundo paso en el camino hacia la igualdad económica de los miembros de la pareja, pues el primero se había dado al aplicar la teoría del enriquecimiento sin causa y hacer, en consecuencia, titular de la acción in rem verso al concubino cuyo trabajo había sido una de las causas para la adquisición de bienes en cabeza del otro.

La Corte Suprema resumió así todo este proceso:

*"El concubinato, que es la resultante de relaciones sexuales permanentes y ostensibles entre un hombre y una mujer no casados entre sí, como situación de hecho que es, desde el punto de vista jurídico ha sido diversamente apreciado por los sistemas de derecho positivo; en algunos aparece repudiado enérgicamente; en otros admitido con definitiva y total eficacia; y, en los más, se lo recibe y regulan sus efectos con determinadas restricciones."*

*"Estas diversas posiciones se apoyan, no obstante, en el mismo fundamento: la moral. Quienes ven en el concubinato una afrenta a las buenas costumbres o un ataque a la familia legítima, lo estiman contrario a la moral y por tanto lo rechazan, negándole eficacia jurídica a las consecuencias que de él dimanen; quienes, en cambio, propugnan su defensa, aseveran que lo inmoral es desconocer en forma absoluta validez a las obligaciones y derechos que son efecto del concubinato".*

*"Los partidarios de la tesis ecléctica ven en la circunstancia del concubinato dos aspectos diferentes: de un lado, las relaciones sexuales que, por no estar legitimadas por el vínculo matrimonial, consideran ilícitas; y de otro, las consecuencias de orden económico que, en rigor jurídico, no están cobijadas por presunción de ilicitud y que, por lo tanto, estiman que deben ser objeto de regulación por el derecho".*

*"De acuerdo con ella, el concubinato no genera, como sí ocurre con el matrimonio, una sociedad de bienes que la Ley se anticipa a reconocer y reglamentar. Con base en la equidad, empero, se sostiene que una conjunción de intereses, deliberada o no por los amantes, un largo trabajo en común puede constituir una sociedad de hecho, producto casi siempre más de las circunstancias que de una actividad razonada y voluntaria".*

*"Fue, pues, así como la Doctrina, en punto de relaciones económicas o patrimoniales de los concubinos, al comienzo abrió la puerta inicialmente a la actio in rem verso, en beneficio del concubino que ha colaborado con el otro en sus empresas; y luego, para la partición de los bienes adquiridos en común y la repartición de los beneficios, se consagró la actio pro socio" (Sentencia, 26 febrero 1976, CLII, 35).*

En este orden de ideas, encontramos que subsistían problemas: la coexistencia del matrimonio, prácticamente disuelto en razón de la separación de hecho, con el concubinato de uno de los esposos, situación que implicaba un conflicto entre la sociedad de ganancias a título universal, surgida por el matrimonio, y la sociedad entre los concubinos, creada por los hechos; la dificultad de probar la existencia de la sociedad de hecho, que exigía la tramitación de un proceso ordinario, etc.

Para remediar estos problemas se promulgo la Ley 54 de 1990 donde la expresión “Unión Marital de Hecho”, acabó con connotaciones degradantes de los términos concubinato, amancebamiento, y denomina a los miembros de esta pareja compañero y compañera permanente. Sin embargo, debemos decir que las disposiciones legales anteriores a la Ley 54 de 1990 explican regulaciones legales injustas, que especialmente perjudicaban a la mujer y a los llamados hijos naturales o extramatrimoniales.

Efectivamente, el artículo segundo establece una presunción simplemente legal sobre la existencia de sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes, en dos casos: el primero supone la inexistencia, entre los compañeros permanentes, de impedimento legal para contraer matrimonio; el segundo, por el contrario, supone la existencia de tal impedimento, pero la disolución y liquidación, previas a la iniciación de la Unión Marital de Hecho, de la sociedad o sociedades conyugales anteriores.

En síntesis, “la Ley 54 de 1990 representa una actitud diametralmente opuesta frente al concubinato: en tanto que la legislación anterior no le asignaba consecuencias económicas por sí mismo, esta Ley, no sólo lo denomina “Unión



Marital de Hecho”, sino que hace de esta unión el supuesto de hecho de la presunción simplemente legal que permite declarar judicialmente la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”.<sup>58</sup>

#### **4.5.5. Unión Marital entre homosexuales.**

La heterosexualidad corresponde al patrón de conducta más generalizado y la mayoría condena socialmente el comportamiento homosexual, pero por este motivo no puede la Ley, sin violar la Constitución, prohibirlo y sancionarlo respecto de los adultos que libremente consientan en actos y relaciones de ese tipo y lo hagan en condiciones que no afecten los estándares mínimos y generales de decencia pública.

El derecho fundamental a la libre opción sexual, sustrae al proceso democrático la posibilidad y la legitimidad de imponer o plasmar a través de la Ley la opción sexual mayoritaria. La sexualidad, aparte de comprometer la esfera más íntima y personal de los individuos (Constitución Política, artículo 15), pertenece al campo de su libertad fundamental, y en ellos el Estado y la colectividad no pueden intervenir, pues no está en juego un interés público que lo amerite y sea pertinente, ni tampoco se genera un daño social. La sexualidad, por fuera de la pareja y de conjuntos reducidos de individuos, no trasciende a escala social ni se proyecta en valores sustantivos y uniformes de contenido sexual.

---

<sup>58</sup> SENTENCIA NO. C-239/94. REF: Expediente D-445 Demanda de inconstitucionalidad del artículo 1o. (parcial) y del inciso segundo (parcial) del artículo 7o. de la ley 54 de 1990 " Por la cual se definen las Uniones Maritales de Hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes.". Actor: Manuel G. Salas Santacruz. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía. Sentencia No. C-239/94 del 19 de mayo de 1994.

La Corte Constitucional no considera que el principio democrático pueda en verdad avalar un consenso mayoritario que relegue a los homosexuales al nivel de ciudadanos de segunda categoría. El principio de igualdad (Constitución Política, artículo 13), se opone, de manera radical, a que a través de la Ley, por razones de orden sexual, se subyugue a una minoría que no comparta los gustos, hábitos y prácticas sexuales de la mayoría. Los prejuicios fóbicos o no y las falsas creencias que han servido históricamente para anatematizar a los homosexuales, no otorgan validez a las Leyes que los convierte en objeto de escarnio público.

“Entre otras manifestaciones de diversidad, amparadas constitucionalmente por el principio del pluralismo e insuprimibles por la voluntad democrática, la Corte no puede dejar de mencionar la religiosa y la sexual. La opción soberana del individuo en estos dos órdenes no concierne al Estado, que ha de permanecer neutral, a no ser que la conducta de los sujetos objetivamente produzca daño social”.<sup>59</sup>

Mediante [sentencia C 798 de 2008](#) la Corte Constitucional modificó el párrafo 1° del artículo 1° de la [Ley 1181 de 2007](#), en el siguiente sentido:

*“La precisión que se hace en esta disposición respecto de los compañeros permanentes, para efectos de la tipificación del delito de inasistencia alimentaria, podría entenderse en el sentido que excluye de la protección al miembro más débil de la relación de pareja*

---

<sup>59</sup> SENTENCIA NO. C-098/96 proferida con ponencia del Magistrado Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, el 7 de marzo de 1996, dentro de la referencia: Demanda N° D-911 Actor: Germán Humberto Rincón Perfetti. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1° y el literal a del artículo 2° de la Ley 54 de 1990 "Por la cual se definen las Uniones Maritales de Hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes".

*constituida por parejas del mismo sexo, en la medida que señala que “únicamente” se tendrá por compañero permanente al hombre y a la mujer que forman parte de la Unión Marital de Hecho, interpretación que resultaría contraria a la Constitución porque configuraría una discriminación y el consecuente déficit de protección frente a las parejas homosexuales. Por tal motivo, la Corte retiró del ordenamiento jurídicamente la expresión “únicamente”, que se declaró inexecutable y condicionó la exequibilidad del resto del párrafo 1º a que se entienda que las expresiones “compañero” y “compañera permanente” comprende también a los integrantes de una pareja del mismo sexo que conforman una Unión Marital de Hecho”.*

#### **4.5.6. Ley 54 de 1990.**

La Ley 54 de 1990, definió respecto de la “Unión Marital de Hecho”, tanto los efectos patrimoniales como los familiares, razón que explica que su sustento normativo se encuentre en el artículo 42 de la Constitución Política:

*“El artículo segundo formula una presunción, simplemente legal, sobre la existencia de "sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes", si ésta ha existido por un lapso no inferior a dos años. Se precisa que si obra un impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compañeros permanentes, la sociedad o sociedades conyugales anteriores han debido ser disueltas o liquidadas por lo menos un año antes de la fecha de iniciación de la Unión Marital de Hecho, a fin de que la presunción pueda*

*efectivamente operar. El propósito de esta norma es "evitar la coexistencia de dos sociedades de ganancias a título universal, nacida una del matrimonio y la otra de la Unión Marital de Hecho" (Corte Constitucional. sentencia C-239 de 1994).*

#### **4.5.7. Concubinos.**

La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, desde el año de 1935, “reconoció la existencia de una sociedad irregular entre concubinos, lo que se hizo en la Ley 54 de 1990 fue conferir legitimidad a la unión material de hecho”.<sup>60</sup>

#### **4.5.8. Evolución legislativa de las uniones de hecho.**

Una línea de sucesivas reformas legales ha introducido progresivamente el principio de igualdad, equidad y mutuo respeto en el ámbito de las relaciones familiares. Este proceso se inició con la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre derechos de la mujer casada, prosiguió con la Ley 75 de 1968 relativa a la paternidad responsable, y continuó con la Ley 29 de 1982 que equiparó los derechos sucesorales de los hijos extramatrimoniales y los matrimoniales.

“(…) La Jurisprudencia con base, primero, en la teoría del enriquecimiento sin causa y, más tarde, en la de la sociedad de hecho, había ofrecido su apoyo a la parte débil de la pareja que con su actividad y esfuerzo participaba en la creación de un patrimonio común. (...)La unión libre de hombre y mujer, "aunque no tengan entre sí vínculos de sangre ni contractuales formales", debe ser objeto de protección del Estado y la sociedad, pues ella da origen a la institución familiar.”<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Ibídem

<sup>61</sup> Ibídem

#### **4.5.9. El concepto de familia frente a las uniones homosexuales.**

El artículo 42 de la Constitución Política dispone ciertos requisitos para la constitución de una familia: (i) que se forme por vínculos naturales o jurídicos; (ii) que se exprese un acto volitivo; (iii) que exista la unión entre un hombre y una mujer, ya sea matrimonial o mediante hechos responsables. Estos requisitos evidencian que la Unión Marital origina una familia y que únicamente puede constituirse a partir de personas de distinto sexo.

Pero no por el hecho de contraer su ámbito a las parejas heterosexuales, se coarta el derecho constitucional a la libre opción sexual. La Ley no impide, en modo alguno, que se constituyan parejas homosexuales y no obliga a las personas a renegar de su condición u orientación sexual. La sociedad patrimonial en sí misma no es un presupuesto necesario para ejercitar este derecho fundamental. En todo caso, la orientación sexual, en modo alguno implica que las personas deban celebrar válidamente con sus pares o con terceros, contratos o negocios de contenido patrimonial, inclusive de naturaleza asociativa.

Sin embargo, aunque la protección a las parejas homosexuales no se ampare en el artículo 42 Constitución Política, no es menos cierto que la constitución obliga a su protección, como lo atestigua un buen número de decisiones judiciales producto de la ausencia de legislación en la materia. No puede olvidarse que el artículo 13 de la Constitución Política prohíbe discriminaciones por razones de sexo que, de acuerdo con el comité de derechos humanos de las naciones unidas

-documento ccpr/c/so/d/488/1.992-, comprende la prohibición de discriminación por razones de orientación sexual, la cual pertenece a la esfera privada de las personas.

*(...) Los antecedentes del artículo 42 de la C.P., en la Asamblea Nacional Constituyente, ponen de presente que la Unión Marital de Hecho, como unión libre de hombre y mujer, corresponde al caso de la familia que se origina por la "voluntad responsable de conformarla".*

*"No es necesario discutir - expresa la citada ponencia - por qué la familia es el núcleo, principio o elemento fundamental de la sociedad. Se reconoce a ella éste lugar de privilegio dentro de la escala social porque todos deberíamos nacer, vivir y morir dentro de una familia".*

Las personas unidas entre sí por vínculos naturales, como los diferentes grados de consanguinidad; o unidas por vínculos jurídicos, que se presentan entre esposos, afines o entre padres e hijos adoptivos, o por la voluntad responsable de constituirla, en los casos en que un hombre y una mujer se unen con la decisión de vivir juntos, tienen pleno derecho a conformar y desarrollar esta base de la sociedad, aunque no tengan entre sí vínculos de sangre ni contractuales formales, si llenan los requisitos de la Ley, su conciencia, sus costumbres o tradiciones, su religión o sus creencias.

Siendo ello así, es apenas obvio determinar la protección del Estado y la sociedad para esa familia y fijar la inviolabilidad para su honra, dignidad e intimidad, así como sentar las bases de su absoluta igualdad de derechos y deberes.

Las familias unidas por vínculos naturales o jurídicos han sido reglamentadas durante toda nuestra vida civil.

Interpretando una necesidad nacional debe reflejarse en la Constitución la realidad en que vive hoy más de la cuarta parte de nuestra población. Se deben complementar las normas legales vigentes sobre “Uniones Maritales de Hecho” y régimen patrimonial entre compañeros permanentes”.

Debido a los cambios de mentalidad, a problemas en la primera unión y al acomodamiento económico y social de las gentes, se ve cómo desde 1900 tiene un incremento sostenido la Unión Marital. En la generación de la primera década de ese siglo, se encuentra un 10% de las familias en esta situación; en la generación del 40 encontramos un 26%; en la del 50 pasa al 30% y en la de 1960 a 1964 asciende a un 45.5%, según indica la obra "La Nupcialidad en Colombia, evolución y tendencia" de las investigadoras Lucero Zamudio y Norma Rubiano".<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ibidem



## **CAPÍTULO 5.**

### **LA UNIÓN MARITAL COMO SEUDO ESTADO CIVIL.**

#### **5.1. Estado Civil**

##### **5.1.1. Concepto del estado civil en las personas naturales.**

El estado civil consiste en la situación jurídica concreta que posee un individuo con respecto a la familia, el Estado o Nación a que pertenece.

Es el conjunto de cualidades que distinguen al individuo de la sociedad y en la familia, tales cualidades dependen de hechos o situaciones que son:

- Soltero
- Casado
- Compañero Permanente – Seudo Estado Civil- (Especie de Estado civil<sup>63</sup> reconocido por vía Jurisprudencial<sup>64</sup>)

---

63 UNIÓN MARITAL DE HECHO-rectificación doctrinaria/ UNIÓN MARITAL DE HECHO-tiene la virtud de establecer o modificar el estado civil de quienes hacen parte de ella/ ESTADO CIVIL-la Unión Marital de Hecho, al igual que el matrimonio, es una especie de estado civil

64 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. 18 de Junio de 2008. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar. Proceso No. 0500131100062004-00205-01. S. Civil, Auto 205.

Así pues, el estado civil es un valor de orden extrapatrimonial, indivisible e inalienable cuya naturaleza social y moral impide intentar acciones a los acreedores donde se afecte la situación jurídica de la persona.

Existen varias corrientes respecto de la definición del Estado civil:

#### ***5.1.1.1. Concepto amplísimo del estado civil:***

Se llama estados civiles a las cualidades o condiciones de las personas que la [Ley](#) toma en cuenta a la hora de atribuirles efectos jurídicos.

Según ésta, el estado civil de una persona es el conjunto de sus cualidades o condiciones de las cuales se derivan consecuencias jurídicas.

Esta Posición es criticada en el sentido de que la mayoría de los autores no admiten un concepto tan amplio, porque consideran que no debe llamarse estado civil a las condiciones relacionadas con la profesión u oficio de las personas.

### **5.1.1.2. Concepto amplio del estado civil.**

Conjunto de condiciones o cualidades de una persona que se refieren a la posición dentro de la [comunidad política](#) (status civitatis), familia (status familiae) y respecto a la misma persona singularmente (status personae) y que van a producir consecuencias jurídicas.

### **5.1.1.3. Conceptos restringidos de estado civil:**

Entre las diferentes corrientes que existen se pueden mencionar:

- Condiciones o cualidades permanentes de las personas que determinan su posición frente a la [sociedad](#) y muy especialmente frente al Estado y a la familia.
- El estado civil se refiere exclusivamente a la posición del [individuo](#) frente a [la familia](#), porque la posición del individuo frente al Estado se hace irrelevante en el Derecho Privado como consecuencia del principio de [igualdad](#) entre nacionales y extranjeros.
- Existe una corriente aún más restringida que relaciona al estado de las personas como la posición de éstas frente al matrimonio.

Sin duda alguna, el estado civil constituye un hecho jurídico complejo, porque está formado por varios hechos jurídicos, siendo uno de los atributos de la personalidad

jurídica. Entonces el estado civil nace, se modifica, conserva, extingue, como consecuencia de respectivos hechos jurídicos simples o complejos.

### **5.1.2. Antecedentes Históricos.**

El origen del estado de las personas emana del antiguo Derecho Romano, donde [el estado](#) era [presupuesto](#) de la capacidad jurídica y de la personalidad jurídica. En aquel entonces, en Roma existían tres tipos de estados: el status libertatis o estado de [libertad](#), el status civitatis o estado de [ciudadanía](#) y el status familiae o estado de [familia](#). El primero se refiere a si las personas son libres o esclavas, el segundo si son ciudadanos o extranjeros y el tercero sui juris (jefes de familia) y alieni juris (sujetos a la potestad de un jefe de familia).

#### ***Status Civitatis:***

Que comprende por ejemplo la [nacionalidad](#) y ciudadanía.

#### ***Status familiae:***

Con respecto al [matrimonio](#) se puede distinguir el estado de soltero, casado, separado de cuerpos, divorciado, viudo, etcétera.

Con relación al parentesco: pariente consanguíneo, estado de pariente por afinidad y estado de extraño.

### ***Status personae:***

Entre las condiciones se pueden señalar:

Es la condición de ser humano, lo que trae como consecuencia la personalidad y los derechos de la personalidad. De este se derivan el derecho al nombre, seudónimo, sobrenombre y lo concerniente a la identificación, como la edad, [salud](#), especialmente la mental, emancipación, que son tomadas en cuenta para determinar la capacidad de las personas. También se incluye el concepto de sedes jurídicas como el domicilio, residencia y habitación.

#### **5.1.3. Características del estado civil.**

- El estado civil en principio es único y absoluto. Único porque de un mismo hecho no puede derivarse sino uno de los estados de cada alternativa, es decir, una persona no puede ser casada y soltera al mismo tiempo, o es casada o soltera pero no puede ser ambas. Es absoluto porque es oponible a todos, es decir puede hacerse valer erga omnes.
- El estado civil es de carácter extrapatrimonial, porque trasciende las cosas y los objetos incorporales susceptibles de tener [valor](#) económico.
- El orden público determina sus caracteres sin permitir que la autonomía de la voluntad de los particulares regule a designio una [materia](#) en que el ordenamiento jurídico se halle interesado para el resguardo de la persona.

- El estado civil interesa al orden público, y por tanto es necesario porque forzosamente toda persona tiene un estado civil, que le individualiza y diferencia de las demás.

- El estado civil influye en la atribución de derechos y deberes. Como es el caso, por ejemplo, de los cónyuges quienes recíprocamente tienen derechos y obligaciones.

- Existe una característica acogida por la Doctrina que consiste en que el estado civil es imprescriptible porque también interesa al orden público.

Si se toma en cuenta al estado civil desde el punto de vista del concepto restringido, es decir, referente exclusivamente a la posición del individuo frente a la familia, se podría decir ciertamente que es imprescriptible, porque lo que sucedería es que podría modificarse si fuere el caso por hechos o actos jurídicos.

En resumen:

- ERGA OMNES. Oponible: proponer, presentar razones o argumentos contra lo que otro manifieste. La palabra Erga Omnes, de raíz latina, cuya etimología expresa "contra todos" o "respecto de todo", se emplea jurídicamente para calificar aquellos derechos cuyos efectos se producen con relación a todos, diferenciándose a los que solo afectan a persona o personas determinadas.
- INDIVISIBLE. El estado civil no puede dividirse para determinados actos.
- PERSONALÍSIMO. Que pertenece a una sola persona.

- INALIENABLE, NO ENAJENABLE: No se encuentra dentro del [comercio](#) de los hombres, está excluido de la compraventa (no puede venderse o comprarse).
- IMPRESCRIPTIBLE: No prescribe, no se pierde por el paso del tiempo.
- IRRENUNCIABLE: No se puede renunciar al estado civil, pero se puede cambiar a otro estado civil.
- INTRANSMISIBLE: No se puede dejar como herencia, no es transmisible como un derecho real.

Como se ha hecho referencia con anticipación, en algunas ocasiones la Ley permite que el estado civil pueda nacer, ser modificado, conservado y extinguido por voluntad de las partes, con la realización de ciertos actos jurídicos.

- En el caso del matrimonio, existe la voluntad propia de contraer matrimonio y por ese hecho se adquiere el estado civil de casado.

– También la Ley permite que a través de un [proceso](#) jurisdiccional pueda llegarse a extinguir un estado civil, como por ejemplo a través de la sentencia de divorcio se extingue el estado civil de casado.

#### **5.1.4. Intervención de la voluntad en la constitución del estado civil.**

Consiste en el hecho de ser titular de un estado civil determinado y gozar de las ventajas y deberes que dicho estado civil conlleve.

El estado civil no se impone por el Estado, cosa distinta es que este determina a través del legislador que conforma estado civil y que no. Es la situación particular de cada individuo dentro de determinado núcleo familiar. El estado civil es una situación jurídica en la familia y en la sociedad, que determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la Ley.

La Corte Constitucional ha expresado que:

*“La decisión de optar entre el estado civil de casado o divorciado, así como la relativa escogencia entre la opción matrimonial y la unión permanente corresponde única y exclusivamente a la pareja, tal como resulta del artículo 42 de la Carta Política. Ni el Estado ni los particulares pueden inferir en las determinaciones que las personas adopten en esa materia, según sus propias necesidades y conveniencias. (...) En este campo, como en todos los que conciernen a la vida privada, ninguna institución, ni pública ni particular, puede erigirse en autoridad para desestimar o desconocer las decisiones autónomas de un individuo respecto de la unión amorosa, sentimental, matrimonial o de convivencia familiar que desee establecer. (...) Lo anterior significa que, si una persona casada decide libremente acogerse a la normatividad para poner fin al vínculo establecido con otra y, también en ejercicio de su libertad, resuelve establecer un nuevo lazo afectivo, bien sea matrimonial o de unión permanente,*



*nadie extraño a los interesados puede legítimamente controvertir esa decisión, ni descalificarla. La nueva esposa o compañera, o el nuevo esposo o compañero, tienen derecho a su condición mientras el establecimiento del nuevo vínculo no vulnere las normas legales pertinentes, y en caso de que esto último acontezca, queda en manos del juez competente la imposición de las sanciones a que haya lugar, según las reglas que la legislación tienen previstas” (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-543 de 1995. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo).*<sup>65</sup>

## **5.2. Seudo Estado Civil – La Confusión en su propósito.**

La confusión es algo que forma parte de nuestras vidas, no creo que exista un solo hombre que en el transcurso de su vida no haya sufrido confusión alguna; es muy común observar como el ser humano se confunde en cualquier momento, por ejemplo, cuando se retrasa al llegar al trabajo o a una cita, lo que sucede es que se nos enseña a mentir desde que somos muy pequeños y se nos acostumbra a vivir rodeados de engaños.

Se pasa por inadvertido que el acto voluntario de constituir la unión marital de hecho comprende el raciocinio de la pareja de no querer consecuencias más allá de las reconocidas en su status, esto es, si no buscan el matrimonio menos será sus consecuencias y reconocimiento como estado civil.

---

<sup>65</sup> A este respecto también se pueden consultar, entre otras las sentencias C-588 de 1992, C-182 de 1997, C-182 de 1997 y C-480 de 1998.

No puede errarse en la interpretación del ideal de los compañeros permanentes, ya que se caería en una mentira; Los hombres han tenido que mentir a sus pueblos para tenerlos en paz, para que confíen en ellos.

Es curioso observar que uno de los pensadores más grandes de la antigüedad, Platón<sup>66</sup>, sostenía que una sociedad perfecta debía basarse en la divina mentira.

En la actualidad pareciera que las personas dan poca importancia al hecho de ocultar la verdad, de dar falso testimonio, aunque es cierto que para algunos se ha convertido en todo un arte “ el arte del engaño” quienes se dedican a este arte lo hacen siempre con el fin de obtener algún beneficio y se valen de todo tipo de argumentos para lograr sus propósitos, dichos argumentos van desde los más sencillos hasta los más complicados, como el de haber sido raptado por un ovni, todos estos argumentos son planteados durante largo tiempo, aunque parezca que son casi espontáneos.

El artista del engaño siempre tiene sus argumentos o por lo menos su base ya preparados y estudiados. El buen mentiroso tiene que considerar y prever cualquier circunstancia que se le pudiera presentar, imaginar situaciones y controversias, en fin, estar siempre un paso delante de los demás.

El artista comprende sin duda que engañar a una persona poco preparada resulta muy sencillo, pero que es más satisfactorio engañar a una persona con alto nivel

---

66 PLATÓN, La República.

intelectual ya que representa mayor reto y estimula al artista a buscar el más alto grado de perfección en sus argumentos.

La historia nos muestra que los más grandes mentirosos han sido siempre personas muy cultas, por lo tanto es imprescindible para mentir con eficacia tener cierto nivel de cultura, tal vez no se necesite ser erudito en alguna materia, sino más bien tener un amplio conocimiento sobre muchos temas “es mejor saber algo sobre todo, que todo sobre algo”

Habría que recordar que la mayoría de los argumentos han sido utilizados con anterioridad por muchas personas, por lo tanto casi no hay argumentos originales, esto nos lleva a concluir que se recopila la información más valiosa y elocuente con la realidad social.<sup>67</sup>

Es así como la Honorable Corte exhortó al Congreso para que legisle sobre las uniones maritales de hecho y las parejas del mismo sexo.: "Es un tema de trascendencia social que merece debate en el Congreso", dijo el presidente de la Corte, magistrado Juan Carlos Henao. La Corte, de todos modos, precisó que esta decisión "solo tiene efectos patrimoniales" y que no altera el concepto de familia que está vigente (unión entre hombre y mujer con fines de procrear) y que es objeto de una de las demandas de la comunidad gay<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> <http://www.tonanzi.com/literatura/filosofia/luis-anrthor/breve-ensayo-sobre-la-mentira>

<sup>68</sup> CORTE DE CONSTITUCIONAL, Boletín de Prensa, 14 de Abril de 2.011.

## **CONCLUSIONES**

1. La carencia en el Ordenamiento Jurídico existente, resalta la importancia del reglamentar de forma íntegra los aspectos relacionados con la Unión Marital de Hecho.
2. Desde luego que el objeto de la Ley 54 de 1990, estuvo dirigido, como lo denota su texto, a definir situaciones de orden económico jurídico y patrimonial, y regular los posibles efectos que este tipo de unión pueda generar en quienes acuerdan unirse por este vínculo.
3. Antes de la mencionada Ley, el Ordenamiento Jurídico colombiano no contaba con ningún régimen legal propio de las Uniones Maritales, en el orden civil. Tanto que hasta el momento el reconocimiento de sus efectos económicos, fruto de la Jurisprudencia, estaba dado sobre la base de que concurrieran los elementos estructurales de una sociedad civil o comercial de hecho, extraños en todo caso a la concepción de la familia.
4. Se trataba de definir, pues, una fisonomía propia al fenómeno social de la Unión Marital, aunque fundamentalmente con el propósito evidente de solucionar un problema patrimonial de la pareja. Fue así como el legislador, ante la presión social de un número cada vez más creciente de parejas unidas por fuera de los vínculos formales, reconoció la Unión Marital, bajo unas condiciones específicas que antes no se habían previsto, en orden de

generar la protección adecuada que garantizara los derechos de sus integrantes.

5. La Ley 54 de 1990 hizo un reconocimiento de la Unión Marital bajo un esquema que no llenó íntegramente el espacio jurídico antes vacío; apenas concedió esta el derecho a reclamar sobre los efectos patrimoniales.
6. Con la expedición de la Constitución de 1991, se vislumbró el sendero de una amplia Jurisprudencia, no solo por parte de la Corte Suprema de Justicia, sino también a cargo de la Corte Constitucional, corporación que hasta el momento ha cumplido con su tarea a través de la expedición de sentencias que han salvaguardado el ordenamiento y los derechos fundamentales de los compañeros permanentes.
7. La Carta Política de 1991, marco un significativo avance en la protección de la institución familiar en relación con el régimen constitucional anterior, como quiera que la inspiración que tuvo el constituyente fue la de reconocer el lugar de privilegio de la familia como elemento fundamental de la sociedad. La Constitución de 1991 es estricta en su definición de familia, dado que determina su carácter monógamo y responsable.
8. En la Carta del 91 se identifican los principios constitucionales de la familia, a saber: En relación con el derecho a la igualdad; Por otro lado, están los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad

9. A través del control constitucional y de tutela se han resuelto de manera paulatina diversos problemas que han surgido a medida que esta institución ha ido creciendo dentro de la sociedad, suscitados por el contenido y aplicación de la Ley 54 de 1990.
10. El cambio social representado por las Uniones Maritales, ha sido acompañado solo parcialmente por la regulación legal de las situaciones que crea la Ley 54 de 1990.
11. Las relaciones entre compañeros permanentes y sus regímenes señalados, no pretenden otra cosa que el reconocimiento de igualdad, equidad y justicia, que debe brindar el Derecho para la convivencia social.
12. Resulta evidente que la mayoría de las normas referentes al contrato de matrimonio contienen criterios distintivos injustificados y que por tal razón, han sufrido una modificación o han sido expulsadas del Ordenamiento Jurídico. El precedente de la Corte ha sido reiterativo y uniforme al señalar que el derecho a la igualdad no hace alusión a la identidad sino a la proporcionalidad.
13. La reglamentación de la Unión Marital y los efectos que de ella se derivan, eran más que necesarios en nuestro país, sin embargo los alcances de esta norma son limitados dada la confusión que su texto genera en interpretes

más preocupados por proteger la tradicional institución del matrimonio, que los principios constitucionales del pluralismo, tolerancia e igualdad.

14. A pesar de que la Ley 54 de 1990 constituyó el mayor avance en el reconocimiento que se le ha dado a la Unión Marital, por haber sido expedida antes de la Constitución de 1991, dejó por fuera la adjudicación de muchos derechos por no considerar la aplicación de principios constitucionales como el de igualdad y el de protección a la familia como núcleo fundamental de la sociedad.
15. La institución de la Unión Marital, reconocida por la Constitución Política de 1991 y cuya consagración legal fue establecida por la Ley 54 de 1990, ha tenido un tratamiento Jurisprudencial a lo largo de estos últimos quince años, el cual ha otorgado parámetros fundamentales para la aplicación de la mencionada Ley.
16. Ha sido la Jurisprudencia la que ha desarrollado una labor armonizadora en torno a la Ley 54 de 1990, por medio de la promulgación de fallos unánimes que han logrado dar coherencia a aspectos sobre los cuales no se pronunció la Ley. En este sentido factores fundamentales como la irretroactividad, ha sido uno de los temas que ha establecido la Jurisprudencia sentando un precedente claro.
17. Por estos motivos es que el legislador debe esforzarse más afondo por promulgar y crear Leyes que modifiquen de manera positiva el Ordenamiento Jurídico, Leyes encaminadas a unificarlo y a promover la coherencia del mismo, adaptándolo según las nuevas necesidades y visiones del Estado Social de Derecho y a los principios promovidos por la Carta Política de 1991.

18. La Honorable Corte Constitucional ha exhortado al Congreso para que legisle sobre las uniones maritales de hecho y las parejas del mismo sexo.: Al igual que ha precisado precisó que esta decisión "solo tiene efectos patrimoniales" y que no altera el concepto de familia que está vigente (unión entre hombre y mujer con fines de procrear)



## **BIBLIOGRAFÍA.**

ANALES DEL CONGRESO de 15 de agosto de 1988, número 79.

BOLAÑOS O., Ildemar. Unión Marital de Hecho. Bogotá, editorial Leyer, 2006.

BELTRÁN SIERRA, Alfredo. Sentencia T-098. Bogotá. Corte Constitucional, 2002

BENAVIDES PATRÓN, Juan. Tribunal Supremo del trabajo. Bogotá, 1949.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-075 del 7 de febrero de 2007, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL; Sentencia C- 014/98; Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-098 de 1996, Magistrado Ponente Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-543 de 1995. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-588 de 1992. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-182 de 1997. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-182 de 1997. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-480 de 1998. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C - 533 de 2000. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 507 de 2004.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 821 de 2005

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1033 de noviembre de 2002. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Treviño.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-190 de 1993, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-553 de 1994. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-202 de 1995 Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-018 de 1997 Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-266 de 1997 Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-566 de 1998, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-660 de 1998, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-1103 de 2000, Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Gálvis.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-286 de 2000, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-1098 de 2002, Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-783 de 2003, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-326 de 1993, Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-491 de 1993, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-042 de 1994, Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-517 de 1993, Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-090 de 1994, Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-122 de 1994, Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-165 de 1994, Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-132 de 1996, Magistrado  
Ponente: Hernando Herrera Vergara

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-358 de 1996, Magistrado  
Ponente: Alejandro Martínez Caballero.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-482 de 1998. Magistrado  
Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-152 de 2002, Magistrado  
Ponente: Alfredo Beltrán Sierra.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C- 174 de 1996, Magistrado  
Ponente: Jorge Arango Mejía

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-239 de 1994, Magistrado  
Ponente: Jorge Arango Mejía.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-1033 de 2002, Magistrado  
Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-014 de 2004, Magistrado  
Ponente: Álvaro Tafur Gálvis.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-102 de 2004, Magistrado  
Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-105 de 1994, Magistrado  
Ponente: Jorge Arango Mejía.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-239 de 1994, Magistrado  
Ponente: Jorge Arango Mejía.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-114 de 1996, Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-533 de 2000, Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-237 de 1997, Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-909 de 2001, Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-014 de 1998, Magistrado Ponente: Cifuentes Muñoz.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-014/98. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C 154 de 1996. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C 388 de 1996. Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-75 del 7 de febrero de 2007. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-098 de 1996. Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz; Salvamento de voto de José Gregorio Hernández Galindo.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia SU-623 del 2001

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-814 DEL 2001

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-349 del 2006

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-163 de 2003. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-814 de 2001. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia SU-253 de 1998. Magistrado Ponente: Marco José Gregorio Hernández.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-523 de 1992. Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-068 de fecha febrero 10 de 1999. MAGISTRADO PONENTE: Alfredo Beltrán Sierra.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. 18 de Junio de 2008. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar. Proceso No. 0500131100062004-00205-01. S. Civil, Auto 205.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Expediente No. 6721, diciembre 12 de 2001, Magistrado Ponente Dr. Jorge Santos Ballesteros.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de noviembre 16 de 2001, Expediente No. 6655. Magistrado Ponente Dr. Manuel Ardila Velásquez.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia S-166-2000 expediente 6117 de septiembre 20 de 2000 Magistrado Ponente Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil; Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casación Civil; Magistrado Ponente: Nicolás Bechara Simancas; Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil uno (2001); Ref.: Expediente No. 5947

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil; Magistrado Ponente: Dr. Jorge Santos Ballesteros; Bogotá. D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dos (2002). Ref. Expediente No. 6660

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; Magistrado Ponente: Dr. Octavio Munar; nueve (9) de marzo de dos mil cuatro (2004); Ref. Expediente No. 6984

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia de marzo 2 de 1999. Radicación 11245. Magistrado Ponente: José Roberto Herrera Vergara.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia de julio 18 de 2000 Rad. 14118. Magistrado Ponente: José Roberto Herrera Vergara

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia de junio 2 de 2000. Radicación 13852, Magistrado Ponente: Germán G. Valdés Sánchez.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA sentencia de 25 de septiembre de 2001 expediente 5947 Magistrado Ponente Dr. Nicolás Bechara Simancas, Auto 0252 del 19 de septiembre de 1997 expediente 6798 Magistrado Ponente Dr. Jorge Santos Ballesteros, Corte Constitucional sentencia C-239/94 Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía Diario Oficial No. 39615 del 31 de diciembre de 1994.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, M.P. Jorge Santos Ballesteros, Sentencia de agosto 27 del 2002, Ref. Expediente No. 6926.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia de junio 25 de 1951, Gaceta judicial, t. LXX, Pág. 24.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia de Junio 28 de 1985.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de Noviembre 30 de 1935, Proceso Porto Carreño Vs. Arango. Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Zuleta Ángel.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. •• Expediente No. 5830. Bogotá D. C., treinta (30) de Octubre de dos mil (2000).Magistrado Ponente Dr. Manuel Ardila Velásquez.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Expediente No. 5798. Bogotá, D.C., noviembre diez (10) de mil novecientos noventa y cinco (1995).Magistrado Ponente Dr. Rafael Romero Sierra.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente No. 6696. Bogotá, D.C.; noviembre veintinueve (29) de dos mil uno (2001). Magistrado Ponente Dr. Manuel Ardila Velásquez.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente No. 6660 Bogotá D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dos (2002).Magistrado Ponente Dr. Jorge Santos Ballesteros.



COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente No. 5947 Bogotá D. C., veinticinco (25) de Septiembre de dos mil uno (2001). Magistrado Ponente Dr. Nicolás Bechara Simancas.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente No. 6984 Bogotá D. C., nueve (9) de marzo de dos mil cuatro (2004). Magistrado Ponente Dr. Pedro Octavio Munar Cadena.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente 6439. Bogotá, D. C., cuatro (4) de Abril de dos mil uno (2001). Magistrado Ponente Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente No. 6117. Bogotá D. C., veinte (20) de Septiembre de dos mil (2.000). Magistrado Ponente Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente No. 5002. Bogotá, D. C., cinco (5) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998). Magistrado Ponente Dr. Rafael Romero Sierra.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente No. 7877. Bogotá D. C., veintidós (22) de Septiembre de dos mil tres (2003). Magistrado Ponente Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Auto 0252 de 1997 Expediente No. 6798. Diecinueve (19) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997). Magistrado Ponente Dr. Jorge Santos Ballesteros.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 30 de octubre de 1998. Expediente No. 4920. Magistrado Ponente: Jorge Antonio Castillo Rugeles. Tema: simulación-lesión enorme.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 31 de julio de 1992. Gaceta Judicial No. 2458. Tema: simulación-lesión enorme).

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 14 de julio de 1990.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 14 de julio de 1990.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 4 de octubre de 1982. Magistrado Ponente: Alberto Ospina. Tema: simulación.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 11 de junio de 1991. Magistrado Ponente: Rafael Romero Sierra. Tema: simulación – prueba de indicios.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 14 de diciembre de 1990. Magistrado Ponente: Alberto Ospina. Tema: ocultación de bienes (art. 1824).

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 15 de septiembre de 1993. Magistrado Ponente: Héctor Marín Naranjo. Tema: simulación.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 13 de junio de 1991. Magistrado Ponente: Alberto Ospina Botero. Tema: contratos de compraventa de bienes muebles entre cónyuges.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 4 de marzo de 1996. Magistrado Ponente: Pedro Lafont Pianetta. Tema: renuncia de gananciales de la sociedad conyugal disuelta.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 15 de octubre de 1953. Magistrado Ponente: Pablo Emilio Manotas. Tema: lesión enorme.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 13 de octubre de 1969. Magistrado Ponente: Flavio Cabrera Duzán. Tema: lesión enorme.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 14 de octubre de 1976. Magistrado Ponente: Ricardo Uribe Holguín. Tema: rescisión por lesión enorme.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 23 de octubre de 1981. Magistrado Ponente: Ricardo Uribe Holguín.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia. En: Gaceta Judicial tomo LVII. Julio 12 de 1994.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia 461 del 14 de diciembre de 1990. Magistrado Ponente: Héctor Marín Naranjo.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia octubre 14 de 1976. Magistrado Ponente: Ricardo Uribe Holguín. En: Gaceta Judicial. Tomo CLII, diciembre de 1976. Número 2393.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia 461 del 14 de diciembre de 1990. Magistrado Ponente: Héctor Marín Naranjo.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 13 de junio de 1991. Tema: compraventa entre cónyuges no divorciados.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 29 de marzo de 1939. Tema: compraventa entre cónyuges no divorciados.

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE Censo 2005.

COLOMBIA. GACETA CONSTITUCIONAL, Nro. 85. Informe Ponencia para primer debate en Plenaria. En Revista Jurisprudencia y Doctrina. Vol. XXVI, Nro. 311 Noviembre de 1997, Bogotá.

COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. COLOMBIA. Instrucciones Administrativas.

COLOMBIA. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ. SALA DE FAMILIA. Bogotá, Agosto 30, 2004. RAD: Magistrado Ponente: Dr. Jaime Omar Cuellar Romero.

COLOMBIA. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ sentencia de agosto 11 de 1995. Magistrado Ponente Dr. Gesael Giraldo.

COLOMBIA. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA, Sala de Familia sentencia del 28 de enero de 1994.

D'AGUANNO, José. La Génesis Y La Evolución Del Derecho Civil. Madrid, La España Moderna.

DEMANDA de inconstitucionalidad del artículo 8o., parcial, de la Ley 54 de 1990. Actor: Jaime Ballesteros Beltrán. Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía. Sentencia 21 de marzo de 1996.

ENCICLOPEDIA JURÍDICA ESPAÑOLA, 2008.

ENFOQUE SOCIOJURÍDICO DE LA CONVIVENCIA EN PAREJA. Aetelaser publicidad Ltda.

GARCÍA, Álvaro Fernando; ROCA, Luz Stella. Hacia un justo régimen de bienes entre compañeros permanentes, Primera edición, editorial semilla y viento 1994, Pág. 275.

GARCÍA RESTREPO, Álvaro. Hacia un justo régimen de bienes entre compañeros permanentes. Editorial "SEMILLA Y VIENTO". Edición. Medellín, 1994.

HINESTROSA, Fernando. Estudios de Derecho de Familia. Universidad Externado de Colombia, Bogotá.

[HTTP://WWW.BUENASTAREAS.COM/TEMAS/OPARIN-SALVAT/620](http://WWW.BUENASTAREAS.COM/TEMAS/OPARIN-SALVAT/620)

LAFONT PIANETTA, Pedro. LAFONT PIANETTA, Pedro, Derecho de Familia-Unión Marital de Hecho, Tercera Edición, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, Colombia, 2001.

LINERO DE CAMBIL MIGUEL ARTURO, Tesis de Grado “La jurisdicción Voluntaria en la Fe Notarial”, 2.010.

MANRIQUE RAMÍREZ, Gilberto. La Unión Marital de Hecho. Monografía; Bogotá: Universidad Externado de Colombia; Facultad de Derecho. 1995.

MESA MARRERO, Carolina. Las uniones de hecho. Análisis de las relaciones económicas y sus efectos. Navarra, Editorial Aranzadi, 2006. ed.

NAVARRO-VALLS, Rafael. Matrimonio y Derecho. Madrid, 1995.

O” CALLAGHAN, Xavier. Consecuencias jurídicas de las uniones de hecho. Cuadernos de Derecho Judicial.

OSPINA F / OSPINA A. Teoría general de los actos o negocios jurídicos.

PÉREZ URENA, Antonio Alberto. Uniones de hecho: estudio práctico de sus efectos civiles. Madrid, Edisofer, S.L., 2000.

PLATÓN, La República (<http://www.paginasobrefilosofia.com/html/prerepub.html>)

PROCESO No. 0500131100062004-00205-01 siendo demandante Juan Carlos Tamayo Mesa y Demandada Mary Nieves Escobar Llupia. Ponencia: Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar. Fecha: 18/06/2008. Decisión: Precisa que el recurso de casación era procedente. Procedencia: Sala Familia Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

QUIROZ MONSALVE, Aroldo. Manual de Familia; Tomo V; Matrimonio civil y religioso y Unión Marital de Hecho; Editorial Doctrina y Ley Ltda.; Bogotá D.C. 1999.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario Español, 2007.

RUIZ, Humberto. El concubinato como fuente de las relaciones jurídicas. (Tesis de Grado), Universidad Nacional, Bogotá, 1953.

RODRÍGUEZ FONNEGRA Jaime. "La Unión Libre ante el derecho civil" en: Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Año XXI.

SUAREZ FRANCO, Roberto, Derecho de Familia, Tomo I, Séptima Edición, Editorial Temis S.A., Bogotá, Colombia, 1998.

SÁNCHEZ MERCADO, Cristina, Unión Marital de Hecho, Editorial Jurídica Equidad, Cali, Colombia, 1995.

VALENCIA ZEA Arturo y ORTIZ MONSALVE, Álvaro. Derecho Civil: Derecho de Familia; Ed. Temis S.A., Bogotá. 1995.

VALENCIA ZEA, Arturo y MONSALVE ORTIZ, Álvaro. Derecho Civil, Tomo V Familia, Temis, 1995.

VALLEJO Juan Álvaro, ECHEVERRY Julio César, LEÓN PALACIO Rodrigo; La Unión Marital de Hecho y el Régimen Patrimonial entre compañeros Permanentes; Biblioteca Jurídica Dike; Medellín; 2000.

ZANNONI Eduardo, El Concubinato. Edit Depalma. 1.970.

### **LEGISLACIÓN:**

COLOMBIA. Constitución de 1991. Bogotá, Legis, 2010

COLOMBIA. Código Civil, Editorial Legis, Bogotá, 2010

Ley 28 de 1932 (noviembre 12), sobre reformas civiles -régimen patrimonial en el matrimonio-. Diario oficial número 22139, de 17 de noviembre de 1932.

Ley 45 de 1936 (marzo 5), sobre reformas civiles (filiación natural). Diario oficial número 23147, de 30 de marzo de 1936.

Ley 12 de 1975 (enero 16), por la cual se dictan algunas disposiciones, sobre régimen de pensiones de jubilación. Diario Oficial No 34245, del 29 de enero de 1975.

Ley 1ª de 1976 (enero 19), por la cual se establece el divorcio en el matrimonio civil y se regula la separación de cuerpos y de bienes en el matrimonio civil y en el canónico, y se modifican algunas disposiciones de los códigos civiles y de

procedimiento civil en materia de derecho de familia. Diario oficial No. 34483, del 5 de febrero de 1976.

Ley 29 de 1982 (febrero 24), por la cual se otorga igualdad de derechos herenciales a los hijos legítimos extramatrimoniales y adoptivos y se hacen los correspondientes ajustes a los diversos órdenes hereditarios. Diario Oficial 35961, del 9 de marzo de 1982.

Ley 113 de 1985 (diciembre 16), por la cual se adiciona la Ley 12 de 1975 y se dictan otras disposiciones. Diario oficial No. 37283, del 20 de diciembre de 1985

Ley 71 de 1988 (diciembre 19), por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 38.624, del 22 de diciembre de 1988.

Ley 54 de 1990 (diciembre 28 de 1990), por la cual se definen las Uniones Maritales de Hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes. Diario Oficial No. 39615, del 31 de diciembre de 1990.

Ley 100 de 1993. (Diciembre 23), por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones, Diario Oficial No. 41.148, de 23 de diciembre de 1993.

Ley 447 de 1998 (julio 21). Por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones.

Ley 797 de 2003 (enero 29), por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales. Diario Oficial No. 45.079 de 29 de enero de 2003.



Ley 979 DE 2005 (julio 26), por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 54 de 1990 y se establecen unos mecanismos ágiles para demostrar la Unión | Marital de Hecho y sus efectos patrimoniales entre compañeros permanentes.